



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014 ✓

FECHA

13 de marzo de 2014

MIEMBROS

HUMBERTO CARDOZO VARGAS ✓

Delegado del Gobernador

HERNANDO ALVARADO SERRATO (AUSENTE) ✓

Director Departamento Administrativo Jurídico

LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR ✓

Secretario de Hacienda

CARLOS ALBERTO MARTIN SALINAS ✓

Secretario General

MARTHA MEDINA RIVAS ✓

Secretaria de Educación

INVITADOS ESPECIALES MARISOL GUTIÉRREZ TRUJILLO ✓

MARTHA CASTRO ✓

Profesional Universitario.

CRISTIAM ZAMORA ✓

Profesional Universitario.

LILIANA TORRES ✓

Profesional Universitario.

YEIMY LORENA RIVAS ✓

Profesional Universitario.

MARIA ANGELICA QUINTERO VIEDA ✓

Profesional Universitario.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

DAVID HUEPE ✓
Profesional Universitario

ORDEN DEL DIA:

- 1.-Verificación del quórum.
- 2.- Exposición, análisis y conclusiones del comité frente a las siguientes solicitudes de conciliación prejudicial o judicial para la Procuraduría Judicial y Juzgados o Tribunales:
 - 2.1.- MARTHA LOSADA OCHOA ✓
 - 2.2.- NUBIA AMPARO ARANGO ✓
 - 2.3.- HECTOR FABIO GARCIA GONZALEZ ✓
 - 2.4.- JIMENO PASCUAS CARDOZO ✓
 - 2.5.- PIEDAD GARCIA TORRES ✓
- 3.-VARIOS
- 4.-RECOMENDACIONES

DESARROLLO

Siendo las 2:30 p.m. del 13 de Marzo de 2014 se da inicio al Comité de Conciliación en Sesión Ordinario, y se procedió a su instalación por parte del delegado del señor Gobernador, Doctor HUMBERTO CARDOZO VARGAS, quien ordenó dar lectura al orden del día, siendo aprobado por los miembros permanentes. Acto seguido se dio inicio a su desarrollo así:

1.-Verificación del quórum.

El presidente del Comité hace el llamado, Advirtiendo la ausencia del Doctor HERNANDO ALVARADO SERRATO Director del Departamento Administrativo Jurídico del Departamento del Huila, se constata y manifiesta la existencia del quórum deliberatorio y decisorio para la presente sesión, por el resto de integrantes. Por lo tanto ordenó continuar el orden del día, siendo aprobado por los miembros permanentes. Acto seguido se dio inicio a la continuación del orden del así:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

2.- Exposición, análisis y conclusiones del Comité frente a la siguiente solicitud de conciliación prejudicial o judicial para la Procuraduría Judicial y Juzgados o Tribunales, entre otros asuntos:

2.1.- MARTHA LOSADA OCHOA

CUANTÍA: \$20.000.000

HECHOS Y PRETENSIONES:

La señora MARTHA LOSADA OCHOA mediante apoderado presentó acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra el Departamento del Huila a efecto de que se declare la existencia de una relación laboral y el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales correspondientes del 21 de febrero al 30 de Noviembre 2003.

En el proceso referido se profirió sentencia condenatoria en contra del Departamento del Huila por el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva, decisión que fue apelada y en trámite del recurso conforme al artículo 192 del CPACA, el Juzgado citó a las partes a audiencia de conciliación por lo que se hace necesario traer el caso a estudio del Comité a efecto de determinar si hay o no ánimo conciliatorio respecto de las pretensiones de la demanda o si nos atenemos a las resultados de lo decidió en segunda instancia por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila.

**ANALISIS y RECOMENDACIÓN DEL APODERAD MARIA ANGELICA
QUINTERO VIEDA**

En el caso que nos ocupa el Juzgado de conocimiento consideró que no estaban probados todos los elementos de la relación laboral para declarar su existencia, en



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

especial en lo que respecta a la prestación personal del servicio por lo cual despacho de manera desfavorable las súplicas de la demanda.

Aunque no fue interpuesta la excepción de prescripción en el caso que nos ocupa, dado que venía siendo despachada de manera desfavorable por todos los Jueces Administrativos, estamos solicitando que la misma se declare de manera oficiosa con fundamento en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 no solamente por la naturaleza de orden público de los derechos laborales sino porque el principio de irrenunciabilidad de los derechos sociales, consagrado en los artículos 53 de la CP y 14 del CST, no es perpetuo sino temporal, es decir, está vinculado a la vigencia de la relación laboral y a un plazo razonable, a fin de dar seguridad jurídica a las relaciones laborales y de seguridad social.

Al respecto, el Consejo de Estado ha sostenido que la prescripción trienal en casos de docentes con contrato de prestación de servicio solo aplica con posterioridad a la sentencia que declare la existencia del contrato realidad, pues mientras el contrato de prestación de servicios gozara de validez no se podía hacer la reclamación por cuanto tales derechos no eran exigibles; sin embargo, recientemente el Consejo de Estado en fallo de tutela SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA Bogotá, D. C., seis (6) de noviembre de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-15-000-2013-01902-00(AC) Actor: DELIA MARGOT RUIZ y Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA Y JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA aclaró que los Jueces en sus providencias se podían apartar de tal precedente jurisprudencial cuando exista una diferencia fáctica entre los casos haciendo precisión que en los casos resueltos favorablemente por el Consejo de Estado no habían pasado más de 3 años entre la finalización de la prestación del servicio y la reclamación.

Bajo la premisa anterior, se tiene que cuando la señora MARTHA LOSADA OCHOA solicitó el pago de prestaciones sociales y demás derechos laborales al Departamento del Huila, los mismos ya se encontraban prescritos, pues habían



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

transcurrido más de tres (3) años desde la fecha de terminación de la vinculación contractual y hasta que se formuló la petición en el año 2011; así, partiendo de que se trata de derechos originados en el año 2003 resulta claro que en principio la demandante tenía hasta el año 2006 respectivamente para solicitarlos y no lo hizo por lo que considero a operado el fenómeno de la prescripción y así deberá ser declarado por el Tribunal.

RECOMENDACIÓN

Por las anteriores consideraciones mi recomendación es NO CONCILIAR.

DECISIÓN:

Terminada la exposición de la apoderada, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden NO CONCILIAR el caso bajo análisis, teniendo en cuenta que cuando la señora MARTHA LOSADA OCHOA solicitó el pago de prestaciones sociales y demás derechos laborales al Departamento del Huila, los mismos ya se encontraban prescritos, pues habían transcurrido más de tres (3) años desde la fecha de terminación de la vinculación contractual y hasta que se formuló la petición en el año 2011; así, partiendo de que se trata de derechos originados en el año 2003 resulta claro que en principio la demandante tenía hasta el año 2006 respectivamente para solicitarlos y no lo hizo por lo que considero a operado el fenómeno de la prescripción y así deberá ser declarado por el Tribunal.

ARGUMENTOS COMITÉ:

NO. La presente decisión se adopta bajo el concepto, según formato único de gestión de comité de conciliación – FUGCC, Concepto NO, "POR PRESCRIPCION".

2.2.- NUBIA AMPARO ARANGO



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

CUANTÍA: \$32.000.000.00=

HECHOS Y PRETENSIONES:

1. El señor GEOVANNY VARGAS ROJAS prestó sus servicios como docentes de la Planta Docente de la Entidad Territorial, a través de las denominadas contratos u Ordenes de Prestación de Servicios tal y como aparece certificado en su hoja de vida.
2. El señor GEOVANNY VARGAS ROJAS desempeño sus funciones bajo las Ordenes de la Administración del DEPARTAMENTO DEL HUILA Secretaria de Educación, en idéntico calendario y jornada laboral que los demás Funcionarios Públicos del Sistema Educativo, cumpliendo el mismo horario de trabajo, recibiendo ordenes directas y diarias de los rectores y Coordinadores del establecimiento y sujetándose al régimen laboral; función por la cual la Entidad le suministro los medios necesarios para adelantar sus labores, tales como elementos de docencia, transporte, oficina, teléfono, aulas de clase, materiales didácticos, etc.
3. El señor GEOVANNY VARGAS ROJAS mantuvo una relación de carácter laboral con el DEPARTAMENTO DEL HUILA pues se dieron los requisitos para ello, tales como: salario, subordinación – recibía y cumplía ordenes de sus superiores, y efectuó la prestación personal al servicio público encomendado, al igual que los demás funcionarios de la Entidad Territorial del Sistema Educativo.
4. Durante el tiempo que laboro, no existió solución de continuidad.
5. La entidad territorial nunca se le reconoció, liquido y pago las prestaciones sociales ni aportes al sistema de seguridad social (salud y pensiones) consagradas en las normas legales vigentes para la época, en igualdad de condiciones en que lo hizo para los empleados públicos docentes, no siendo tampoco reclamados.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

ANALISIS y RECOMENDACIÓN DEL APODERAD CRISTIAN MANUEL ZAMORA RIVERA

1.- Verificada la historia laboral del señor GEOVANNY VARGAS ROJAS, no se encontró soportes documentales de Órdenes de Prestación de Servicio del educador, según la certificación expedida por la Profesional Universitaria LUZ MARY VARGAS CASTRO.

2.- Que el educador GEOVANNY VARGAS ROJAS, No tiene soporte para demostrar su vinculación contractual con el Departamento.

Respecto de los fundamentos de derecho se hace el siguiente análisis:

Los Decretos 3135 de 1968, artículo 41 y 1848 de 1969 artículo 102, establecieron la prescripción trienal para todas las acciones tendientes a las prestaciones sociales propias de una relación laboral, de ahí que le sea aplicable para el presente caso, en tanto que, en el presente derecho de petición se tiene como propósito la declaración de una relación laboral simulada en contratos de prestación de servicio, con el único fin, de que se sean reconocidos y pagados los derechos económicos sobre las prestaciones que de él se deriven. Este tiempo se contabiliza a partir del momento en que finalizan los sucesivos contratos.

Desde la sentencia C 916 de 2010, igualmente la Corte Constitucional nos hace un recuento histórico de la exequibilidad de la prescripción extintiva de la acción trienal en los derechos laborales, al retrotraerse a la sentencia C- 072 de 1994, en donde expuso:

“ ...

- (i) El núcleo esencial del derecho al trabajo no se desconoce, por el hecho de existir la prescripción de la acción laboral concreta.
- (ii) La prescripción extintiva lo es de la acción, pero en momento alguno hace referencia al derecho protegido por el artículo 25 constitucional.
- (iii) No se lesiona al trabajador por el hecho de que la ley fije términos para el ejercicio de la acción laboral. El derecho de los trabajadores se respeta,

GT
7
Página



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

simplemente se limita el ejercicio de la acción, y se le da un término razonable para ello. El núcleo esencial del derecho al trabajo no sólo está incólume, sino protegido, ya que la prescripción de corto plazo, en estos eventos, busca mayor prontitud en el ejercicio de la acción, dada la supremacía del derecho fundamental, el cual comporta la exigencia de acción y protección oportunas. Así, pues, el legislador no hizo cosa distinta a hacer oportuna la acción; de ahí que lo que, en estricto sentido, prescribe es la viabilidad de una acción concreta derivada de la relación laboral, pero nunca el derecho-deber del trabajo.

(iv) La finalidad de la prescripción es adecuar a la realidad el sentido mismo de la oportunidad, con lo cual logra que no se desvanezca el principio de la inmediatez, que, obviamente, favorece al trabajador, por ser la parte más necesitada en la relación laboral

(v) Es acertado el racionamiento del legislador ya que, por unanimidad doctrinal -y también por elementales principios de conveniencia- lo justo jamás puede ser inoportuno, puesto que al ser una perfección social, siempre será adecuado a las circunstancias determinadas por el tiempo, como factor en el que opera lo jurídico.

(vi) Las prescripciones de corto plazo buscan también la seguridad jurídica, que al ser de interés general, es prevalente (art. 1o. superior). Y hacen posible la vigencia de un orden justo (art. 2o. superior), el cual no puede ser jamás legitimador de lo que atente contra la seguridad jurídica, como sería el caso de no fijar pautas de oportunidad de la acción concreta derivada del derecho substancial.

(vii) Las normas acusadas, lejos de atentar contra la dignidad del trabajador, se caracterizan por establecer una seguridad jurídica, por razones de beneficio mutuo de los extremos de la relación laboral, que se ven en situación de inmediatez y prontitud, razón por la cual una prescripción de largo plazo dificultaría a patronos y a trabajadores la tenencia o conservación de pruebas que faciliten su demostración en el juicio. Es por ello que la prescripción de tres años de la acción laboral es proporcionada con las necesidades, y por tanto no es contraria a la igualdad, ya que ésta consiste en una equivalencia proporcional, y no en una homologación jurídica absoluta de materias diversas, lo cual sería, a todas luces, un absurdo.

(viii) Las normas acusadas son en beneficio directo del trabajador, pues buscan la seguridad en la vida jurídica. Se le brinda a aquel la oportunidad para reclamar el

ST
N

Página 8



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

derecho que le ha sido concedido, pero ponen a dicha oportunidad un límite temporal, determinado por la inmediatez que emana de la relación laboral. Después de ese lapso, no hay un verdadero interés en el reclamo, puesto que no ha manifestado su pretensión dentro de un tiempo prudente para exteriorizar su razón jurídica.

5.3. En suma, la Sentencia C- 072 de 1994, analizó las disposiciones normativas acá acusadas (art. 488 y art. 151) del Código Sustantivo de Trabajo y del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente; y lo realizó bajo las mismas controversias jurídicas planteadas en la presente demanda. Por tal razón, esta Corte declarará estarse a lo resuelto en la Sentencia C-072 de 1994 que declaró exequibles el artículo 488 del Código Sustantivo de Trabajo y el artículo 151 del Código Procesal de Trabajo."

Soportado en estos dos elementos de carácter jurídico y jurisprudencial, el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila-Sala Tercera Oral, viene declarando la prescripción extintiva del derecho por haber transcurrido el tiempo legal y reglamentario laboral de los tres años para accionar y para interrumpir el término prescriptivo.

RECOMENDACIÓN

En conclusión, de lo expuesto se deriva el imperativo **NO CONCILIAR**, por cuanto que, no tiene soporte para demostrar su vinculación contractual con el Departamento.

DECISIÓN:

Terminada la exposición del apoderado, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden **NO CONCILIAR** el caso bajo análisis, teniendo en cuenta que ha ocurrido el fenómeno de la prescripción, no evidenciarse pruebas que soporten la pretensión y a que la convocante no está legitimada por activa para pretender lo solicitado.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

ARGUMENTOS COMITÉ:

NO. La presente decisión se adopta bajo el concepto, según formato único de gestión de comité de conciliación – FUGCC, Concepto NO, "POR PRESCRIPCION", NO. "FALTA DE PRUEBAS ELEMENTOS DE RESPONSABILIDAD: DAÑO – HECHO ACCION U OMISION – NEXO CAUSAL" y NO. POR FALTA DE REPRESENTACION O LEGITIMACION DEL RECLAMANTE (POR ACTIVA).

2.3.- HECTOR FABIO GARCIA GONZALEZ

CUANTÍA: \$3.000.000.00=

HECHOS Y PRETENSIONES:

1. HECTOR FABIO GARCIA GONZALEZ fue vinculada al servicio de la entidad territorial mediante contrato u orden de prestación de servicios para desempeñarse como docente en instituciones educativas durante las fechas certificadas por el Departamento del Huila.
2. Durante el tiempo que se desempeño como docente del señor HECTOR FABIO GARCIA GONZALEZ, desarrollo sus funciones bajo estrictas instrucciones sin que existiera autonomía, sino una total subordinación y dependencia de la institución, que ha cambio de su labor recibía una prestación mensual provenientes de recursos del departamento, e igualmente estaba sometido a la supervisión y vigilancia de los organismos oficiales expresamente facultativos para ellos.
3. En razón de lo anterior la señora HECTOR FABIO GARCIA GONZALEZ, fue parte de una relación de carácter laboral, se configura los elementos de



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

subordinación, prestación personal del servicio y remuneración por el servicio prestado.

4. Mensualmente el docente recibió como contraprestación una paga mensual denominado "honorarios", suma inferior a la reconocida como salario básico a los demás educadores de igual condición.

ANALISIS y RECOMENDACIÓN DEL APODERAD CRISTIAM MANUEL ZAMORA RIVERA

1. Verificada la historia laboral del señor HECTOR FABIO GARCIA GONZALEZ que reposa en el archivo de gestión de la Secretaría de Educación, se pudo constatar que se encuentra escalafonado en el grado 1ª .

2. El docente ha sido nombrada en provisionalidad bajo el régimen establecido en el estatuto de profesionalización docente (Decreto 1278 del 19 de junio de 2002) con el Decreto 546 del 18 de abril del 2005.

Fue vinculado mediante órdenes de prestación de servicios departamentales, en los siguientes periodos:

No.	ORDEN DE PRESTACION	TIEMPO DE PERIODO	TIEMPO LABORA EN DIAS	INSTITUCION
283	04/02 al 30/ 04/2002	60	CENTRO	DOCENTE RURQL EL DORADO EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA
624	02/05/ AL 14 /06/2002	42	CENTRO	DOCENTE RURAL EL DORADO EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA
1058	15/07 AL 30/09 DEL 2002	45	CENTRO	DOCENTE RURAL EL DORADO EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA
206	27/01 AL 21/06/2003	152	I.E LA RELIGIONA	(EL DORADO) MUNICIPIO DE COLOMBIA
793	14/07 AL 30/08/2003	54	CENTRO	DOCENTE RURAL EL DORADO EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

6013 01 AL 30/09/2003 30 I.E LA RELIGIONA (EL DORADO) MUNICIPIO DE COLOMBIA

1331 01/10 AL 30/11/2003 60 I.E LA RELIGIONA (EL DORADO) MUNICIPIO DE COLOMBIA

Que el educador HECTOR FAVIO GARCIA GONZALEZ tiene soporte para demostrar su vinculación contractual únicamente entre los meses de 4 de febrero al 20 de agosto del 2002 y del 27 de febrero al 30 de noviembre del 2003.

Respecto de los fundamentos de derecho se hace el siguiente análisis:

Los Decretos 3135 de 1968, artículo 41 y 1848 de 1969 artículo 102, establecieron la prescripción trienal para todas las acciones tendientes las prestaciones sociales propias de una relación laboral, de ahí que le sea aplicable para el presente caso, en tanto que, en el presente derecho de petición se tiene como propósito la declaración de una relación laboral simulada en contratos de prestación de servicio, con el único fin, de que se sean reconocidos y pagados los derechos económicos sobre las prestaciones que de él se deriven. Este tiempo se contabiliza a partir del momento en que finalizan los sucesivos contratos.

Desde la sentencia C 916 de 2010, igualmente la Corte Constitucional nos hace un recuento histórico de la exequibilidad de la prescripción extintiva de la acción trienal en los derechos laborales, al retrotraerse a la sentencia C- 072 de 1994, en donde expuso:

" ...

- (i) El núcleo esencial del derecho al trabajo no se desconoce, por el hecho de existir la prescripción de la acción laboral concreta.
- (ii) La prescripción extintiva lo es de la acción, pero en momento alguno hace referencia al derecho protegido por el artículo 25 constitucional.
- (iii) No se lesiona al trabajador por el hecho de que la ley fije términos para el ejercicio de la acción laboral. El derecho de los trabajadores se respeta, simplemente se limita el ejercicio de la acción, y se le da un término razonable para ello. El núcleo esencial del derecho al trabajo no sólo está incólume, sino



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

protegido, ya que la prescripción de corto plazo, en estos eventos, busca mayor prontitud en el ejercicio de la acción, dada la supremacía del derecho fundamental, el cual comporta la exigencia de acción y protección oportunas. Así, pues, el legislador no hizo cosa distinta a hacer oportuna la acción; de ahí que lo que, en estricto sentido, prescribe es la viabilidad de una acción concreta derivada de la relación laboral, pero nunca el derecho-deber del trabajo.

(iv) La finalidad de la prescripción es adecuar a la realidad el sentido mismo de la oportunidad, con lo cual logra que no se desvanezca el principio de la inmediatez, que, obviamente, favorece al trabajador, por ser la parte más necesitada en la relación laboral

(v) Es acertado el racionamiento del legislador ya que, por unanimidad doctrinal -y también por elementales principios de conveniencia- lo justo jamás puede ser inoportuno, puesto que al ser una perfección social, siempre será adecuado a las circunstancias determinadas por el tiempo, como factor en el que opera lo jurídico.

(vi) Las prescripciones de corto plazo buscan también la seguridad jurídica, que al ser de interés general, es prevalente (art. 1o. superior). Y hacen posible la vigencia de un orden justo (art. 2o. superior), el cual no puede ser jamás legitimador de lo que atente contra la seguridad jurídica, como sería el caso de no fijar pautas de oportunidad de la acción concreta derivada del derecho substancial.

(vii) Las normas acusadas, lejos de atentar contra la dignidad del trabajador, se caracterizan por establecer una seguridad jurídica, por razones de beneficio mutuo de los extremos de la relación laboral, que se ven en situación de inmediatez y prontitud, razón por la cual una prescripción de largo plazo dificultaría a patronos y a trabajadores la tenencia o conservación de pruebas que faciliten su demostración en el juicio. Es por ello que la prescripción de tres años de la acción laboral es proporcionada con las necesidades, y por tanto no es contraria a la igualdad, ya que ésta consiste en una equivalencia proporcional, y no en una homologación jurídica absoluta de materias diversas, lo cual sería, a todas luces, un absurdo.

(viii) Las normas acusadas son en beneficio directo del trabajador, pues buscan la seguridad en la vida jurídica. Se le brinda a aquel la oportunidad para reclamar el derecho que le ha sido concedido, pero ponen a dicha oportunidad un límite temporal, determinado por la inmediatez que emana de la relación laboral.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

Después de ese lapso, no hay un verdadero interés en el reclamo, puesto que no ha manifestado su pretensión dentro de un tiempo prudente para exteriorizar su razón jurídica.

5.3. En suma, la Sentencia C- 072 de 1994, analizó las disposiciones normativas acá acusadas (art. 488 y art. 151) del Código Sustantivo de Trabajo y del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente; y lo realizó bajo las mismas controversias jurídicas planteadas en la presente demanda. Por tal razón, esta Corte declarará estarse a lo resuelto en la Sentencia C-072 de 1994 que declaró exequibles el artículo 488 del Código Sustantivo de Trabajo y el artículo 151 del Código Procesal de Trabajo."

Soportado en estos dos elementos de carácter jurídico y jurisprudencial, el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila-Sala Tercera Oral, viene declarando la prescripción extintiva del derecho por haber transcurrido el tiempo legal y reglamentario laboral de los tres años para accionar y para interrumpir el término prescriptivo.

RECOMENDACIÓN

En conclusión, de lo expuesto se deriva el imperativo de NO CONCILIAR, por cuanto que, las OPS reclamadas se ejecutaron en las siguientes fechas:

El Señor HECTOR FAVIO GARCIA GONZALEZ tiene soporte para demostrar su vinculación contractual únicamente entre los meses de 4 de febrero al 20 de agosto del 2002 y del 27 de febrero al 30 de noviembre del 2003, ha superado el término legal por lo tanto se presenta el fenómeno jurídico de prescripción.

DECISIÓN:

Terminada la exposición del apoderado, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden NO CONCILIAR el caso bajo análisis, teniendo en cuenta que el Señor HECTOR FABIO GARCIA GONZALEZ tiene soporte para demostrar su vinculación contractual únicamente



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

entre los meses de 4 de febrero al 20 de agosto del 2002 y del 27 de febrero al 30 de noviembre del 2003, ha superado el término legal por lo tanto se presenta el fenómeno jurídico de prescripción.

ARGUMENTOS COMITÉ:

NO. La presente decisión se adopta bajo el concepto, según formato único de gestión de comité de conciliación – FUGCC, Concepto NO, "POR PRESCRIPCION".

2.4.- JIMENO PASCUAS CARDOZO

CUANTÍA: \$11.000.000.00=

HECHOS Y PRETENSIONES:

1. JIMENO PASCUAS CARDOZO fue vinculada al servicio de la entidad territorial mediante contrato u orden de prestación de servicios para desempeñarse como docente en instituciones educativas durante las fechas certificadas por el Departamento del Huila.

2. Durante el tiempo que se desempeño como docente la señora JIMENO PASCUAS CARDOZO, desarrollo sus funciones bajo estrictas instrucciones sin que existiera autonomía, sino una total subordinación y dependencia de la institución, que ha cambio de su labor recibía una prestación mensual provenientes de recursos del departamento, e igualmente estaba sometido a la supervisión y vigilancia de los organismos oficiales expresamente facultativos para ellos.

3. En razón de lo anterior la señora JIMENO PASCUAS CARDOZO, fue parte de una relación de carácter laboral, se configura los elementos de subordinación, prestación personal del servicio y remuneración por el servicio prestado.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

4. Mensualmente el docente recibió como contraprestación una paga mensual denominado "honorarios", suma inferior a la reconocida como salario básico a los demás educadores de igual condición.

ANALISIS y RECOMENDACIÓN DEL APODERADO CRISTIAM MANUEL ZAMORA

1.- Verificada la historia laboral del señor JIMENO PASCUAS CARDOZO, no se encontró soportes documentales de Órdenes de Prestación de Servicio del educador, según la certificación expedida por la Profesional Universitaria LUZ MARY VARGAS CASTRO.

2.- Que el educador JIMENO PASCUAS CARDOZO No tiene soporte para demostrar su vinculación contractual con el Departamento.

Respecto de los fundamentos de derecho se hace el siguiente análisis:

Los Decretos 3135 de 1968, artículo 41 y 1848 de 1969 artículo 102, establecieron la prescripción trienal para todas las acciones tendientes a las prestaciones sociales propias de una relación laboral, de ahí que le sea aplicable para el presente caso, en tanto que, en el presente derecho de petición se tiene como propósito la declaración de una relación laboral simulada en contratos de prestación de servicio, con el único fin, de que se sean reconocidos y pagados los derechos económicos sobre las prestaciones que de él se deriven. Este tiempo se contabiliza a partir del momento en que finalizan los sucesivos contratos.

Desde la sentencia C 916 de 2010, igualmente la Corte Constitucional nos hace un recuento histórico de la exequibilidad de la prescripción extintiva de la acción trienal en los derechos laborales, al retrotraerse a la sentencia C- 072 de 1994, en donde expuso:

" ...

(i) El núcleo esencial del derecho al trabajo no se desconoce, por el hecho de existir la prescripción de la acción laboral concreta.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

(ii) La prescripción extintiva lo es de la acción, pero en momento alguno hace referencia al derecho protegido por el artículo 25 constitucional.

(iii) No se lesiona al trabajador por el hecho de que la ley fije términos para el ejercicio de la acción laboral. El derecho de los trabajadores se respeta, simplemente se limita el ejercicio de la acción, y se le da un término razonable para ello. El núcleo esencial del derecho al trabajo no sólo está incólume, sino protegido, ya que la prescripción de corto plazo, en estos eventos, busca mayor prontitud en el ejercicio de la acción, dada la supremacía del derecho fundamental, el cual comporta la exigencia de acción y protección oportunas. Así, pues, el legislador no hizo cosa distinta a hacer oportuna la acción; de ahí que lo que, en estricto sentido, prescribe es la viabilidad de una acción concreta derivada de la relación laboral, pero nunca el derecho-deber del trabajo.

(iv) La finalidad de la prescripción es adecuar a la realidad el sentido mismo de la oportunidad, con lo cual logra que no se desvanezca el principio de la inmediatez, que, obviamente, favorece al trabajador, por ser la parte más necesitada en la relación laboral

(v) Es acertado el racionamiento del legislador ya que, por unanimidad doctrinal -y también por elementales principios de conveniencia- lo justo jamás puede ser inoportuno, puesto que al ser una perfección social, siempre será adecuado a las circunstancias determinadas por el tiempo, como factor en el que opera lo jurídico.

(vi) Las prescripciones de corto plazo buscan también la seguridad jurídica, que al ser de interés general, es prevalente (art. 1o. superior). Y hacen posible la vigencia de un orden justo (art. 2o. superior), el cual no puede ser jamás legitimador de lo que atente contra la seguridad jurídica, como sería el caso de no fijar pautas de oportunidad de la acción concreta derivada del derecho substancial.

(vii) Las normas acusadas, lejos de atentar contra la dignidad del trabajador, se caracterizan por establecer una seguridad jurídica, por razones de beneficio mutuo de los extremos de la relación laboral, que se ven en situación de inmediatez y prontitud, razón por la cual una prescripción de largo plazo dificultaría a patronos y a trabajadores la tenencia o conservación de pruebas que faciliten su demostración en el juicio. Es por ello que la prescripción de tres años de la acción laboral es proporcionada con las necesidades, y por tanto no es contraria a la igualdad, ya que ésta consiste en una equivalencia proporcional, y no en una



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

homologación jurídica absoluta de materias diversas, lo cual sería, a todas luces, un absurdo.

(viii) Las normas acusadas son en beneficio directo del trabajador, pues buscan la seguridad en la vida jurídica. Se le brinda a aquel la oportunidad para reclamar el derecho que le ha sido concedido, pero ponen a dicha oportunidad un límite temporal, determinado por la inmediatez que emana de la relación laboral. Después de ese lapso, no hay un verdadero interés en el reclamo, puesto que no ha manifestado su pretensión dentro de un tiempo prudente para exteriorizar su razón jurídica.

5.3. En suma, la Sentencia C- 072 de 1994, analizó las disposiciones normativas acá acusadas (art. 488 y art. 151) del Código Sustantivo de Trabajo y del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente; y lo realizó bajo las mismas controversias jurídicas planteadas en la presente demanda. Por tal razón, esta Corte declarará estarse a lo resuelto en la Sentencia C-072 de 1994 que declaró exequibles el artículo 488 del Código Sustantivo de Trabajo y el artículo 151 del Código Procesal de Trabajo."

Soportado en estos dos elementos de carácter jurídico y jurisprudencial, el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila-Sala Tercera Oral, viene declarando la prescripción extintiva del derecho por haber transcurrido el tiempo legal y reglamentario laboral de los tres años para accionar y para interrumpir el término prescriptivo.

RECOMENDACIÓN

En conclusión, de lo expuesto se deriva el imperativo NO CONCILIAR, por cuanto que, no tiene soporte para demostrar su vinculación contractual con el Departamento.

DECISIÓN:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

Terminada la exposición del apoderado, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden **NO CONCILIAR** el caso bajo análisis, teniendo en cuenta que se presenta el fenómeno jurídico de la prescripción.

ARGUMENTOS COMITÉ:

NO. La presente decisión se adopta bajo el concepto, según formato único de gestión de comité de conciliación – FUGCC, Concepto NO, "POR PRESCRIPCION".

2.5.- PIEDAD GARCIA TORRES

CUANTÍA: \$11.000.000.00=

HECHOS Y PRETENSIONES:

1. Piedad García Torres fue vinculada al servicio de la entidad territorial mediante contrato u orden de prestación de servicios para desempeñarse como docente en instituciones educativas durante las fechas certificadas por el Departamento del Huila.
2. Durante el tiempo que se desempeño como docente la señora PIEDAD GARCIA TORRES, desarrollo sus funciones bajo estrictas instrucciones sin que existiera autonomía, sino una total subordinación y dependencia de la institución, que ha cambio de su labor recibía una prestación mensual provenientes de recursos del departamento, e igualmente estaba sometido a la supervisión y vigilancia de los organismos oficiales expresamente facultativos para ellos.
3. En razón de lo anterior la señora PIEDAD GARCIA TORRES, fue parte de una relación de carácter laboral, se configura los elementos de subordinación, prestación personal del servicio y remuneración por el servicio prestado.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

4. Mensualmente el docente recibió como contraprestación una paga mensual denominado "honorarios", suma inferior a la reconocida como salario básico a los demás educadores de igual condición.

ANALISIS y RECOMENDACIÓN DEL APODERADO CRISTIAN MANUEL ZAMORA

1.- Verificada la historia laboral de la señora PIEDAD GARCIA TORRES que reposa en el archivo de gestión de la Secretaría de Educación, se pudo constatar que fue inscrita en el escalafón docente por Resolución No.0091 en el grado 7.

2.- La docente ha sido nombrada en provisionalidad con la Ley 715 del 21 de diciembre del 2001 con el Decreto 162 del 13 de febrero del 2004.

Fue vinculada mediante órdenes de prestación de servicios departamentales, en los siguientes periodos:

No.	ORDEN DE PRESTACION	TIEMPO DE PERIODO	TIEMPO LABORA EN DIAS	INSTITUCION
-----	---------------------	-------------------	-----------------------	-------------

0526

24 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2003	60	INSTITUTO EDUCATIVO CENTRO EDUCATIVO RURAL LA BERNAZA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA
---------------------------------------	----	---

2331 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2003	59	INSTITUTO EDUCATIVO CENTRO EDUCATIVO RURAL LA BERNAZA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA
---	----	---

4069 07 AL 30 DE JULIO DEL 2003	23	INSTITUTO EDUCATIVO CENTRO EDUCATIVO RURAL LA BERNAZA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA
---------------------------------	----	---

6505 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2003	59	INSTITUTO EDUCATIVO CENTRO EDUCATIVO RURAL LA BERNAZA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA
--	----	---

7603 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003	60	INSTITUTO EDUCATIVO CENTRO EDUCATIVO RURAL LA BERNAZA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA
--	----	---



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

La señora PIEDAD GARCIA TORRES tiene soporte para demostrar su vinculación contractual únicamente entre los periodos comprendidos del 24 de febrero al 30 de noviembre del 2003.

Respecto de los fundamentos de derecho se hace el siguiente análisis:

Los Decretos 3135 de 1968, artículo 41 y 1848 de 1969 artículo 102, establecieron la prescripción trienal para todas las acciones tendientes las prestaciones sociales propias de una relación laboral, de ahí que le sea aplicable para el presente caso, en tanto que, en el presente derecho de petición se tiene como propósito la declaración de una relación laboral simulada en contratos de prestación de servicio, con el único fin, de que se sean reconocidos y pagados los derechos económicos sobre las prestaciones que de él se deriven. Este tiempo se contabiliza a partir del momento en que finalizan los sucesivos contratos.

Desde la sentencia C 916 de 2010, igualmente la Corte Constitucional nos hace un recuento histórico de la exequibilidad de la prescripción extintiva de la acción trienal en los derechos laborales, al retrotraerse a la sentencia C- 072 de 1994, en donde expuso:

" ...

- (i) El núcleo esencial del derecho al trabajo no se desconoce, por el hecho de existir la prescripción de la acción laboral concreta.
- (ii) La prescripción extintiva lo es de la acción, pero en momento alguno hace referencia al derecho protegido por el artículo 25 constitucional.
- (iii) No se lesiona al trabajador por el hecho de que la ley fije términos para el ejercicio de la acción laboral. El derecho de los trabajadores se respeta, simplemente se limita el ejercicio de la acción, y se le da un término razonable para ello. El núcleo esencial del derecho al trabajo no sólo está incólume, sino protegido, ya que la prescripción de corto plazo, en estos eventos, busca mayor prontitud en el ejercicio de la acción, dada la supremacía del derecho fundamental, el cual comporta la exigencia de acción y protección oportunas. Así, pues, el legislador no hizo cosa distinta a hacer oportuna la acción; de ahí que lo que, en



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

estricto sentido, prescribe es la viabilidad de una acción concreta derivada de la relación laboral, pero nunca el derecho-deber del trabajo.

(iv) La finalidad de la prescripción es adecuar a la realidad el sentido mismo de la oportunidad, con lo cual logra que no se desvanezca el principio de la inmediatez, que, obviamente, favorece al trabajador, por ser la parte más necesitada en la relación laboral

(v) Es acertado el racionamiento del legislador ya que, por unanimidad doctrinal -y también por elementales principios de conveniencia- lo justo jamás puede ser inoportuno, puesto que al ser una perfección social, siempre será adecuado a las circunstancias determinadas por el tiempo, como factor en el que opera lo jurídico.

(vi) Las prescripciones de corto plazo buscan también la seguridad jurídica, que al ser de interés general, es prevalente (art. 1o. superior). Y hacen posible la vigencia de un orden justo (art. 2o. superior), el cual no puede ser jamás legitimador de lo que atente contra la seguridad jurídica, como sería el caso de no fijar pautas de oportunidad de la acción concreta derivada del derecho substancial.

(vii) Las normas acusadas, lejos de atentar contra la dignidad del trabajador, se caracterizan por establecer una seguridad jurídica, por razones de beneficio mutuo de los extremos de la relación laboral, que se ven en situación de inmediatez y prontitud, razón por la cual una prescripción de largo plazo dificultaría a patronos y a trabajadores la tenencia o conservación de pruebas que faciliten su demostración en el juicio. Es por ello que la prescripción de tres años de la acción laboral es proporcionada con las necesidades, y por tanto no es contraria a la igualdad, ya que ésta consiste en una equivalencia proporcional, y no en una homologación jurídica absoluta de materias diversas, lo cual sería, a todas luces, un absurdo.

(viii) Las normas acusadas son en beneficio directo del trabajador, pues buscan la seguridad en la vida jurídica. Se le brinda a aquel la oportunidad para reclamar el derecho que le ha sido concedido, pero ponen a dicha oportunidad un límite temporal, determinado por la inmediatez que emana de la relación laboral. Después de ese lapso, no hay un verdadero interés en el reclamo, puesto que no ha manifestado su pretensión dentro de un tiempo prudente para exteriorizar su razón jurídica.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

5.3. En suma, la Sentencia C- 072 de 1994, analizó las disposiciones normativas acá acusadas (art. 488 y art. 151) del Código Sustantivo de Trabajo y del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente; y lo realizó bajo las mismas controversias jurídicas planteadas en la presente demanda. Por tal razón, esta Corte declarará estarse a lo resuelto en la Sentencia C-072 de 1994 que declaró exequibles el artículo 488 del Código Sustantivo de Trabajo y el artículo 151 del Código Procesal de Trabajo."

Soportado en estos dos elementos de carácter jurídico y jurisprudencial, el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila-Sala Tercera Oral, viene declarando la prescripción extintiva del derecho por haber transcurrido el tiempo legal y reglamentario laboral de los tres años para accionar y para interrumpir el término prescriptivo.

En conclusión, de lo expuesto se deriva el imperativo deber NO CONCILIAR, por cuanto que, las OPS reclamadas se ejecutaron para cada caso en las siguientes fechas:

La señora PIEDAD GARCIA TORRES tiene soporte para demostrar su vinculación contractual únicamente entre los periodos comprendidos del 24 de febrero al 30 de noviembre del 2003, ha Superado el término legal por lo tanto se presenta el fenómeno jurídico de prescripción.

RECOMENDACIÓN

En conclusión, de lo expuesto se deriva el imperativo deber NO CONCILIAR, por cuanto que, las OPS reclamadas se ejecutaron para cada caso en las siguientes fechas:

La señora PIEDAD GARCIA TORRES tiene soporte para demostrar su vinculación contractual únicamente entre los periodos comprendidos del 24 de febrero al 30 de noviembre del 2003, ha Superado el término legal por lo tanto se presenta el fenómeno jurídico de prescripción.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

DECISIÓN:

Terminada la exposición del apoderado, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden **NO CONCILIAR** el caso bajo análisis, teniendo en cuenta que señora **PIEDAD GARCIA TORRES** tiene soportes para demostrar su vinculación contractual únicamente entre los periodos comprendidos del 24 de febrero al 30 de noviembre del 2003, pero ha Superado el término legal para reclamar, por lo tanto se presenta el fenómeno jurídico de la prescripción.

ARGUMENTOS COMITÉ:

NO. La presente decisión se adopta bajo el concepto, según formato único de gestión de comité de conciliación – FUGCC, Concepto **NO**, “**POR PRESCRIPCION**”.

3.-VARIOS

NUEVAS SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL

Los apoderados **YEIMY LORENA RIVAS YUSTRES, MARTHA CASTRO Y DAVID HUPE** solicitan al Comité la aprobación para exponer las solicitudes que no están incluidas en el orden del día; porque no fueron entregadas oportunamente a la Secretaria del Comité, lo cual fue aprobado por los Miembros del Comité.

3.1.- LINA MARCELA CUELLAR

CUANTÍA: \$ 7.640.616

HECHOS Y PRETENSIONES:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

1.- La señora LINA MARCELA CUELLAR perteneciente a la planta de docentes del Departamento del Huila solicitó el reconocimiento y pago de la Prima de Servicios, a partir de la fecha de su vinculación al Ramo de la Docencia Oficial, por considerar que tienen derecho con fundamento en el Decreto 2277 de 1979, Ley 91 de 1989 y Ley 115 de 1994.

Así mismo, solicita el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados desde que la obligación se hizo exigible así como la indexación o ajuste al valor sobre las sumas de dinero adeudadas por concepto de prima.

2.- Mediante resoluciones No. Resolución No. 799 de 2013, la Secretaría de Educación Departamental negó tales pretensiones argumentando lo siguiente:

Con las consideraciones consignadas, de carácter Jurídico y Jurisprudencia se puede colegir que el parágrafo 2 del artículo 15 de la 91 de 1989 No crea la prima de servicios para los educadores, sino que reconoce el derecho a quienes venían percibiéndola con anterioridad a la vigencia de dicha Ley, la cual se encuentra a cargo de la Nación. El parágrafo segundo, debe interpretarse armónicamente con los artículos 1 y 2 ibídem, que establecen las responsabilidades económicas existentes de las entidades territoriales a la fecha de vigencia de la Ley 91 de 1989, haciendo extensivo a futuro los derechos adquiridos que existieren de las prestaciones sociales ya reconocidas a los educadores y/o docentes.

Es preciso tener en cuenta que cuando el Departamento del Huila en aplicación de la Ley 60 de 1993 y Ley 115 de 1994, descentralización de la educación, en ninguno de sus documentos aparece ni directamente ni implícitamente este emolumento como parte de obligación a cargo de la entidad territorial, mucho menos ha sido consignada en las diferentes normas que regula dicha descentralización, ni en los Decretos de salarios para docentes que se expiden anualmente por el Presidente de la República.

Fuerza concluir que la entidad territorial no tiene competencia para reconocer o negar esta pretensión (prima de servicio de docentes), conforme los mandatos



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

constitucionales artículo 150 numeral 19 Literales e y f, desarrollado en la Ley 4 de 1992, que fija el marco normativo, los objetivos y criterios para regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y la competencia exclusiva en el ejecutivo Nacional, por tanto cualquier disposición normativa que contravenga la jerarquía de la Ley, se expondrá a carecer de efectos jurídicos.

3.- Mediante resolución No. 899 de diciembre de 2013, la Secretaría de Educación Departamental confirmó la decisión adoptada mediante resolución No. 899 de 2013.

4.- A efecto de llegar a un acuerdo con el Departamento respecto al pago de tales prestaciones sociales y de agotar el requisito de procedibilidad para acudir al medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, la docente presentó mediante apoderado solicitud de conciliación ante la Procuraduría Judicial para asuntos Administrativos la cual se pone a consideración de los miembros del Comité para lo de su competencia.

ANÁLISIS y RECOMENDACIÓN DE LA APODERADA YEIMY LORENA RIVAS YUSTRES

Para entrar a analizar el asunto objeto de conciliación, basado en el principio rector de legalidad, me permito realizar las siguientes precisiones:

Con la conciliación los convocantes pretenden el reconocimiento y pago de la prima de servicio.

Como primera medida, es necesario precisar que nos encontramos frente a empleados públicos vinculados a este ente territorial, por homologación que se hizo a la planta de personal del Departamento, y que por disposición normativa le es aplicable el régimen especial contemplado en la ley 91 de 1989 y la ley 115 de 1994.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

De acuerdo al régimen aplicable a los docentes relacionados no les asiste derecho a disfrutar de la bonificación por servicios prestados y la bonificación por recreación, prestaciones contenidas en los Decretos 1042 de 1978 y 1919 de 2002.

En efecto, el artículo 104 literal b del Decreto 1042 de 1978, en el artículo 104, consagra las excepciones a la aplicación dicho decreto, al disponer que "las normas del presente Decreto no se aplicarán a las siguientes personas, cuya remuneración se establecerá en otras disposiciones: (...) b) al personal docente de los distintos organismos de la Rama Ejecutiva".

No sucede lo mismo con la prima de servicio, ya que la Ley 91 de 1989 en su artículo 15 párrafo 2 reconoce expresamente en favor de los docentes el beneficio de la prima de servicios al señalar en el Parágrafo 2 que "El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no pagará las siguientes prestaciones, que continuarán a cargo de la Nación como entidad nominadora, en favor del personal nacional o nacionalizado, vinculado antes o con posterioridad al 31 de diciembre de 1989: Primas de navidad, de servicios y de alimentación, subsidio familiar, auxilio de transporte o movilización y vacaciones."

Con ello, se observa claramente en la norma transcrita, la intención del legislador de reconocer el derecho a la prima de servicios al personal docente nacional o nacionalizado de las instituciones educativas estatales.

Ahora bien, la Ley 91 de 1989, es un conjunto de normas expedidas con el fin de definir el régimen prestacional de los docentes estatales (nacional, nacionalizado y territorial) para lo cual se dispone la creación de un Fondo unificado nacional que asumirá en adelante la carga prestacional, fijando las siguientes reglas:

"Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se registrarán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

(...)"

Conforme a la norma referida, los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, continuarían siendo regidos por el régimen prestacional que venían gozando en cada entidad territorial según las circunstancias particulares para cada caso, y por otro lado aquellos vinculados a partir del 1 de enero de 1990, se registrarán por el régimen vigente aplicable a los empleados públicos del orden nacional, de conformidad con los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

De igual manera, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, establece en los mismos parámetros de la Ley 91 de 1989, lo siguiente:

- "Artículo 6º.- (:..)El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. (...)."

Posteriormente, la Ley 115 de 1994 por medio de la cual se expide la Ley general de Educación, en su artículo 115, igualmente reitera que los docentes se registrarán por lo establecido en la Ley 91 de 1989 en materia prestacional:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

- "ARTICULO 115. Régimen especial de los educadores estatales. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente Ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente ley. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política, el estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y salarios legales. En ningún caso se podrán desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los educadores."

Del párrafo que preside, se desprende que el régimen salarial y prestacional docente, se define siguiendo las reglas establecidas en la Ley 91 de 1989, es decir, dependiendo de la vinculación del docente se puede establecer las normas que le son aplicables, así entonces para aquellos nacionalizados que se vincularon hasta el 31 de diciembre de 1989 se les respetará el régimen salarial y prestacional que venían gozando en la respectiva entidad territorial, y aquellos que se vincularon a partir del 1 de enero de 1990, se regirían por el régimen vigente aplicable a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

En un sentido semejante, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, establece:

"Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley."

Así, al existir una norma que contempla la Prima de Servicio como prestación y que hace parte del régimen especial al que están sujetos los docentes, los mismos si tienen derecho a percibir tal prestación laboral, máxime cuando la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido la inclusión de dicha prima al momento de liquidar otro tipo de prestaciones, tales como la cesantía de los servidores que



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

tienen dicha calidad (sentencia del 25 de marzo de 2010 de la Sección Segunda, Subsección A, de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado), pero debe ser el Ministerio de Educación Nacional quien proceda a su reconocimiento, dado que para el año 1989 cuando entró en vigencia la Ley 91, el nominador era la Nación y con la descentralización administrativa de la educación de la Ley 60 de 1993 no se trasladó el pago de dicha obligación laboral a las entidades territoriales dado que ningún docente la venía percibiendo, como se puede establecer con los diferentes Decretos de Salarios, no obstante lo anterior, considero que el Departamento en su calidad de nominador debe llamar en garantía a la NACION-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Entidad que debe concurrir con los recursos toda vez que en el proceso de descentralización ordenado en la Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994, no entregó tal emolumento como obligación a cargo de la Entidad Territorial, tampoco aparece contemplada en normas que regula dicha descentralización, ni en los Decretos de Salarios para docentes que se expiden anualmente por el Presidente de la República. La norma que regula tal prestación se encuentra en la Ley 91 de 1989, que ordena estar a cargo de la Nación y consta como factor salarial para liquidar la pensión en el Decreto Ley 1045 de 1978, siendo la Nación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la obligada al pago de las pensiones de los docentes. En éstos términos considero que no se encuentra integrado al trámite de conciliación la NACION-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, entidad que hasta la fecha no se ha pronunciado conforme se verifica en la Resolución No. 1135 de 2012, acto administrativo que en la parte considerativa y resolutive se abstiene de contestar el derecho de petición de los aquí convocantes, para remitir al Ministerio de Educación Nacional a efectos que se pronuncie sobre la solicitud de reconocimiento y pago de la prima de servicios.

RECOMENDACIÓN

Con fundamento en lo expuesto, recomiendo a los miembros del Comité de Conciliación NO CONCILIAR hasta tanto se integre al trámite de Conciliación La Nación-Ministerio de Educación Nacional.

DECISIÓN:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

Terminada la exposición de la apoderada, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden **NO CONCILIAR** el caso bajo análisis, teniendo en cuenta que la Nación Ministerio de Educación no ha dado autorización para su reconocimiento por consiguiente se debe llamar en garantía a la Nación Ministerio de Educación ya que es quien debe suministrar los recursos del Sistema General de Participación Educación.

ARGUMENTOS COMITÉ:

NO. La presente decisión se adopta bajo el concepto, según formato único de gestión de comité de conciliación – FUGCC, Concepto **NO**, "OTROS" porque debe concurrir otra entidad para resolver el conflicto.

3.2.- GLADYS ELENA DUSSAN DIAZ

CUANTÍA: \$ 7.640.616

HECHOS Y PRETENSIONES:

1.- La señora **GLADYS ELENA DUSSAN DIAZ** perteneciente a la planta de docentes del Departamento del Huila solicitó el reconocimiento y pago de la Prima de Servicios, a partir de la fecha de su vinculación al Ramo de la Docencia Oficial, por considerar que tienen derecho con fundamento en el Decreto 2277 de 1979, Ley 91 de 1989 y Ley 115 de 1994.

Así mismo, solicita el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados desde que la obligación se hizo exigible así como la indexación o ajuste al valor sobre las sumas de dinero adeudadas por concepto de prima.

2.- Mediante resoluciones No. Resolución No. 728 de 2013, la Secretaría de Educación Departamental negó tales pretensiones argumentando lo siguiente:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

Con las consideraciones consignadas, de carácter Jurídico y Jurisprudencia se puede colegir que el párrafo 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 No crea la prima de servicios para los educadores, sino que reconoce el derecho a quienes venían percibiéndola con anterioridad a la vigencia de dicha Ley, la cual se encuentra a cargo de la Nación. El párrafo segundo, debe interpretarse armónicamente con los artículos 1 y 2 ibídem, que establecen las responsabilidades económicas existentes de las entidades territoriales a la fecha de vigencia de la Ley 91 de 1989, haciendo extensivo a futuro los derechos adquiridos que existieren de las prestaciones sociales ya reconocidas a los educadores y/o docentes.

Es preciso tener en cuenta que cuando el Departamento del Huila en aplicación de la Ley 60 de 1993 y Ley 115 de 1994, descentralización de la educación, en ninguno de sus documentos aparece ni directamente ni implícitamente este emolumento como parte de obligación a cargo de la entidad territorial, mucho menos ha sido consignada en las diferentes normas que regula dicha descentralización, ni en los Decretos de salarios para docentes que se expiden anualmente por el Presidente de la República.

Fuerza concluir que la entidad territorial no tiene competencia para reconocer o negar esta pretensión (prima de servicio de docentes), conforme los mandatos constitucionales artículo 150 numeral 19 Literales e y f, desarrollado en la Ley 4 de 1992, que fija el marco normativo, los objetivos y criterios para regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y la competencia exclusiva en el ejecutivo Nacional, por tanto cualquier disposición normativa que contravenga la jerarquía de la Ley, se expondrá a carecer de efectos jurídicos.

3.- Mediante resolución No. 900 de diciembre de 2013, la Secretaría de Educación Departamental confirmó la decisión adoptada mediante resolución No. 728 de 2013.

4.- A efecto de llegar a un acuerdo con el Departamento respecto al pago de tales prestaciones sociales y de agotar el requisito de procedibilidad para acudir al medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, la docente presentó



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

mediante apoderado solicitud de conciliación ante la Procuraduría Judicial para asuntos Administrativos la cual se pone a consideración de los miembros del Comité para lo de su competencia.

ANALISIS y RECOMENDACIÓN DE LA APODERADA YEIMY LORENA RIVAS YUSTRES

Para entrar a analizar el asunto objeto de conciliación, basado en el principio rector de legalidad, me permito realizar las siguientes precisiones:

Con la conciliación los convocantes pretenden el reconocimiento y pago de la prima de servicio.

Como primera medida, es necesario precisar que nos encontramos frente a empleados públicos vinculados a este ente territorial, por homologación que se hizo a la planta de personal del Departamento, y que por disposición normativa le es aplicable el régimen especial contemplado en la ley 91 de 1989 y la ley 115 de 1994.

De acuerdo al régimen aplicable a los docentes relacionados no les asiste derecho a disfrutar de la bonificación por servicios prestados y la bonificación por recreación, prestaciones contenidas en los Decretos 1042 de 1978 y 1919 de 2002.

En efecto, el artículo 104 literal b del Decreto 1042 de 1978, en el artículo 104, consagra las excepciones a la aplicación dicho decreto, al disponer que "las normas del presente Decreto no se aplicarán a las siguientes personas, cuya remuneración se establecerá en otras disposiciones: (...) b) al personal docente de los distintos organismos de la Rama Ejecutiva".

No sucede lo mismo con la prima de servicio, ya que la Ley 91 de 1989 en su artículo 15 párrafo 2 reconoce expresamente en favor de los docentes el beneficio de la prima de servicios al señalar en el Parágrafo 2 que "El Fondo



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no pagará las siguientes prestaciones, que continuarán a cargo de la Nación como entidad nominadora, en favor del personal nacional o nacionalizado, vinculado antes o con posterioridad al 31 de diciembre de 1989: Primas de navidad, de servicios y de alimentación, subsidio familiar, auxilio de transporte o movilización y vacaciones.”

Con ello, se observa claramente en la norma transcrita, la intención del legislador de reconocer el derecho a la prima de servicios al personal docente nacional o nacionalizado de las instituciones educativas estatales.

Ahora bien, la Ley 91 de 1989, es un conjunto de normas expedidas con el fin de definir el régimen prestacional de los docentes estatales (nacional, nacionalizado y territorial) para lo cual se dispone la creación de un Fondo unificado nacional que asumirá en adelante la carga prestacional, fijando las siguientes reglas:

“Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

(...)”

Conforme a la norma referida, los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, continuarían siendo regidos por el régimen prestacional que venían gozando en cada entidad territorial según las circunstancias particulares para cada caso, y por otro lado aquellos vinculados a partir del 1 de enero de 1990, se regirán por el



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

régimen vigente aplicable a los empleados públicos del orden nacional, de conformidad con los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

De igual manera, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, establece en los mismos parámetros de la Ley 91 de 1989, lo siguiente:

- "Artículo 6º.- (...)El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. (...)."

Posteriormente, la Ley 115 de 1994 por medio de la cual se expide la Ley general de Educación, en su artículo 115, igualmente reitera que los docentes se regirán por lo establecido en la Ley 91 de 1989 en materia prestacional:

- "ARTICULO 115. Régimen especial de los educadores estatales. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente Ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente ley. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política, el estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y salarios legales. En ningún caso se podrán desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los educadores."

Del párrafo que preside, se desprende que el régimen salarial y prestacional docente, se define siguiendo las reglas establecidas en la Ley 91 de 1989, es decir, dependiendo de la vinculación del docente se puede establecer las normas que le son aplicables, así entonces para aquellos nacionalizados que se vincularon hasta el 31 de diciembre de 1989 se les respetará el régimen salarial y prestacional que venían gozando en la respectiva entidad territorial, y aquellos que se vincularon a partir del 1 de enero de 1990, se regirían por el régimen vigente



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

aplicable a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

En un sentido semejante, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, establece:

“Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.”

Así, al existir una norma que contempla la Prima de Servicio como prestación y que hace parte del régimen especial al que están sujetos los docentes, los mismos si tienen derecho a percibir tal prestación laboral, máxime cuando la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido la inclusión de dicha prima al momento de liquidar otro tipo de prestaciones, tales como la cesantía de los servidores que tienen dicha calidad (sentencia del 25 de marzo de 2010 de la Sección Segunda, Subsección A, de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado), pero debe ser el Ministerio de Educación Nacional quien proceda a su reconocimiento, dado que para el año 1989 cuando entró en vigencia la Ley 91, el nominador era la Nación y con la descentralización administrativa de la educación de la Ley 60 de 1993 no se trasladó el pago de dicha obligación laboral a las entidades territoriales dado que ningún docente la venía percibiendo, como se puede establecer con los diferentes Decretos de Salarios, no obstante lo anterior, considero que el Departamento en su calidad de nominador debe llamar en garantía a la NACION-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Entidad que debe concurrir con los recursos toda vez que en el proceso de descentralización ordenado en la Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994, no entregó tal emolumento como obligación a cargo de la Entidad Territorial, tampoco aparece contemplada en normas que regula dicha descentralización, ni en los Decretos de Salarios para docentes que se expiden anualmente por el Presidente de la República. La norma que regula tal prestación se encuentra en la Ley 91 de 1989, que ordena estar a cargo de la Nación y



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

consta como factor salarial para liquidar la pensión en el Decreto Ley 1045 de 1978, siendo la Nación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la obligada al pago de las pensiones de los docentes. En éstos términos considero que no se encuentra integrado al trámite de conciliación la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, entidad que hasta la fecha no se ha pronunciado conforme se verifica en la Resolución No. 1135 de 2012, acto administrativo que en la parte considerativa y resolutive se abstiene de contestar el derecho de petición de los aquí convocantes, para remitir al Ministerio de Educación Nacional a efectos que se pronuncie sobre la solicitud de reconocimiento y pago de la prima de servicios.

RECOMENDACIÓN

Con fundamento en lo expuesto, recomiendo a los miembros del Comité de Conciliación NO CONCILIAR hasta tanto se integre al trámite de Conciliación La Nación-Ministerio de Educación Nacional.

DECISIÓN:

Terminada la exposición de la apoderada, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden NO CONCILIAR el caso bajo análisis, teniendo en cuenta que la Nación Ministerio de Educación no ha dado autorización para su reconocimiento por consiguiente se debe llamar en garantía a la Nación Ministerio de Educación ya que es quien debe suministrar los recursos del Sistema General de Participación Educación.

ARGUMENTOS COMITÉ:

NO. La presente decisión se adopta bajo el concepto, según formato único de gestión de comité de conciliación – FUGCC, Concepto NO, "OTROS" porque debe concurrir otra entidad para resolver el conflicto.

3.3.- SANDRA MILENA MURCIA CHARRY



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

CUANTÍA: \$ 7.640.616

HECHOS Y PRETENSIONES:

1.- La señora SANDRA MILENA MURCIA CHARRY perteneciente a la planta de docentes del Departamento del Huila solicitó el reconocimiento y pago de la Prima de Servicios, a partir de la fecha de su vinculación al Ramo de la Docencia Oficial, por considerar que tienen derecho con fundamento en el Decreto 2277 de 1979, Ley 91 de 1989 y Ley 115 de 1994.

Así mismo, solicita el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados desde que la obligación se hizo exigible así como la indexación o ajuste al valor sobre las sumas de dinero adeudadas por concepto de prima.

2.- Mediante resoluciones No. Resolución No. 728 de 2013, la Secretaría de Educación Departamental negó tales pretensiones argumentando lo siguiente:

Con las consideraciones consignadas, de carácter Jurídico y Jurisprudencia se puede colegir que el parágrafo 2 del artículo 15 de la 91 de 1989 No crea la prima de servicios para los educadores, sino que reconoce el derecho a quienes venían percibiéndola con anterioridad a la vigencia de dicha Ley, la cual se encuentra a cargo de la Nación. El parágrafo segundo, debe interpretarse armónicamente con los artículos 1 y 2 ibídem, que establecen las responsabilidades económicas existentes de las entidades territoriales a la fecha de vigencia de la Ley 91 de 1989, haciendo extensivo a futuro los derechos adquiridos que existieren de las prestaciones sociales ya reconocidas a los educadores y/o docentes.

Es preciso tener en cuenta que cuando el Departamento del Huila en aplicación de la Ley 60 de 1993 y Ley 115 de 1994, descentralización de la educación, en ninguno de sus documentos aparece ni directamente ni implícitamente este emolumento como parte de obligación a cargo de la entidad territorial, mucho menos ha sido consignada en las diferentes normas que regula dicha



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

descentralización, ni en los Decretos de salarios para docentes que se expiden anualmente por el Presidente de la República.

Fuerza concluir que la entidad territorial no tiene competencia para reconocer o negar esta pretensión (prima de servicio de docentes), conforme los mandatos constitucionales artículo 150 numeral 19 Literales e y f, desarrollado en la Ley 4 de 1992, que fija el marco normativo, los objetivos y criterios para regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y la competencia exclusiva en el ejecutivo Nacional, por tanto cualquier disposición normativa que contravenga la jerarquía de la Ley, se expondrá a carecer de efectos jurídicos.

3.- Mediante resolución No. 900 de diciembre de 2013, la Secretaría de Educación Departamental confirmó la decisión adoptada mediante resolución No. 728 de 2013.

4.- A efecto de llegar a un acuerdo con el Departamento respecto al pago de tales prestaciones sociales y de agotar el requisito de procedibilidad para acudir al medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, la docente presentó mediante apoderado solicitud de conciliación ante la Procuraduría Judicial para asuntos Administrativos la cual se pone a consideración de los miembros del Comité para lo de su competencia.

ANALISIS y RECOMENDACIÓN DE LA APODERADA YEIMY LORENA RIVAS YUSTRES

Para entrar a analizar el asunto objeto de conciliación, basado en el principio rector de legalidad, me permito realizar las siguientes precisiones:

Con la conciliación los convocantes pretenden el reconocimiento y pago de la prima de servicio.

Como primera medida, es necesario precisar que nos encontramos frente a empleados públicos vinculados a este ente territorial, por homologación que se



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

hizo a la planta de personal del Departamento, y que por disposición normativa le es aplicable el régimen especial contemplado en la ley 91 de 1989 y la ley 115 de 1994 .

De acuerdo al régimen aplicable a los docentes relacionados no les asiste derecho a disfrutar de la bonificación por servicios prestados y la bonificación por recreación, prestaciones contenidas en los Decretos 1042 de 1978 y 1919 de 2002.

En efecto, el artículo 104 literal b del Decreto 1042 de 1978, en el artículo 104, consagra las excepciones a la aplicación dicho decreto, al disponer que "las normas del presente Decreto no se aplicarán a las siguientes personas, cuya remuneración se establecerá en otras disposiciones: (...) b) al personal docente de los distintos organismos de la Rama Ejecutiva".

No sucede lo mismo con la prima de servicio, ya que la Ley 91 de 1989 en su artículo 15 párrafo 2 reconoce expresamente en favor de los docentes el beneficio de la prima de servicios al señalar en el Parágrafo 2 que "El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no pagará las siguientes prestaciones, que continuarán a cargo de la Nación como entidad nominadora, en favor del personal nacional o nacionalizado, vinculado antes o con posterioridad al 31 de diciembre de 1989: Primas de navidad, de servicios y de alimentación, subsidio familiar, auxilio de transporte o movilización y vacaciones."

Con ello, se observa claramente en la norma transcrita, la intención del legislador de reconocer el derecho a la prima de servicios al personal docente nacional o nacionalizado de las instituciones educativas estatales.

Ahora bien, la Ley 91 de 1989, es un conjunto de normas expedidas con el fin de definir el régimen prestacional de los docentes estatales (nacional, nacionalizado y territorial) para lo cual se dispone la creación de un Fondo unificado nacional que asumirá en adelante la carga prestacional, fijando las siguientes reglas:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

"Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

(...)"

Conforme a la norma referida, los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, continuarían siendo regidos por el régimen prestacional que venían gozando en cada entidad territorial según las circunstancias particulares para cada caso, y por otro lado aquellos vinculados a partir del 1 de enero de 1990, se regirán por el régimen vigente aplicable a los empleados públicos del orden nacional, de conformidad con los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

De igual manera, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, establece en los mismos parámetros de la Ley 91 de 1989, lo siguiente:

- "Artículo 6º.- (:..)El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. (...)."



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

Posteriormente, la Ley 115 de 1994 por medio de la cual se expide la Ley general de Educación, en su artículo 115, igualmente reitera que los docentes se regirán por lo establecido en la Ley 91 de 1989 en materia prestacional:

- "ARTICULO 115. Régimen especial de los educadores estatales. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente Ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente ley. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política, el estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y salarios legales. En ningún caso se podrán desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los educadores."

Del párrafo que preside, se desprende que el régimen salarial y prestacional docente, se define siguiendo las reglas establecidas en la Ley 91 de 1989, es decir, dependiendo de la vinculación del docente se puede establecer las normas que le son aplicables, así entonces para aquellos nacionalizados que se vincularon hasta el 31 de diciembre de 1989 se les respetará el régimen salarial y prestacional que venían gozando en la respectiva entidad territorial, y aquellos que se vincularon a partir del 1 de enero de 1990, se regirán por el régimen vigente aplicable a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

En un sentido semejante, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, establece:

"Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley."

Así, al existir una norma que contempla la Prima de Servicio como prestación y que hace parte del régimen especial al que están sujetos los docentes, los mismos



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

si tienen derecho a percibir tal prestación laboral, máxime cuando la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido la inclusión de dicha prima al momento de liquidar otro tipo de prestaciones, tales como la cesantía de los servidores que tienen dicha calidad (sentencia del 25 de marzo de 2010 de la Sección Segunda, Subsección A, de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado), pero debe ser el Ministerio de Educación Nacional quien proceda a su reconocimiento, dado que para el año 1989 cuando entró en vigencia la Ley 91, el nominador era la Nación y con la descentralización administrativa de la educación de la Ley 60 de 1993 no se trasladó el pago de dicha obligación laboral a las entidades territoriales dado que ningún docente la venía percibiendo, como se puede establecer con los diferentes Decretos de Salarios, no obstante lo anterior, considero que el Departamento en su calidad de nominador debe llamar en garantía a la NACION-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Entidad que debe concurrir con los recursos toda vez que en el proceso de descentralización ordenado en la Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994, no entregó tal emolumento como obligación a cargo de la Entidad Territorial, tampoco aparece contemplada en normas que regula dicha descentralización, ni en los Decretos de Salarios para docentes que se expiden anualmente por el Presidente de la República. La norma que regula tal prestación se encuentra en la Ley 91 de 1989, que ordena estar a cargo de la Nación y consta como factor salarial para liquidar la pensión en el Decreto Ley 1045 de 1978, siendo la Nación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la obligada al pago de las pensiones de los docentes. En éstos términos considero que no se encuentra integrado al trámite de conciliación la NACION-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, entidad que hasta la fecha no se ha pronunciado conforme se verifica en la Resolución No. 1135 de 2012, acto administrativo que en la parte considerativa y resolutive se abstiene de contestar el derecho de petición de los aquí convocantes, para remitir al Ministerio de Educación Nacional a efectos que se pronuncie sobre la solicitud de reconocimiento y pago de la prima de servicios.

RECOMENDACIÓN



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

Con fundamento en lo expuesto, recomiendo a los miembros del Comité de Conciliación NO CONCILIAR hasta tanto se integre al trámite de Conciliación La Nación-Ministerio de Educación Nacional.

DECISIÓN:

Terminada la exposición de la apoderada, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden NO CONCILIAR el caso bajo análisis, teniendo en cuenta que la Nación Ministerio de Educación no ha dado autorización para su reconocimiento por consiguiente se debe llamar en garantía a la Nación Ministerio de Educación ya que es quien debe suministrar los recursos del Sistema General de Participación Educación.

ARGUMENTOS COMITÉ:

NO. La presente decisión se adopta bajo el concepto, según formato único de gestión de comité de conciliación – FUGCC, Concepto NO, "OTROS" porque debe concurrir otra entidad para resolver el conflicto.

3.4.- PAOLA FERNANDA BARAHONA FERNANDEZ

CUANTÍA: \$ 7.640.616

HECHOS Y PRETENSIONES:

1.-La señora PAOLA FERNANDA BARAHONA FERNANDEZ perteneciente a la planta de docentes del Departamento del Huila solicitó el reconocimiento y pago de la Prima de Servicios, a partir de la fecha de su vinculación al Ramo de la Docencia Oficial, por considerar que tienen derecho con fundamento en el Decreto 2277 de 1979, Ley 91 de 1989 y Ley 115 de 1994.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

Así mismo, solicita el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados desde que la obligación se hizo exigible así como la indexación o ajuste al valor sobre las sumas de dinero adeudadas por concepto de prima.

2.- Mediante resoluciones No. Resolución No. 728 de 2013, la Secretaría de Educación Departamental negó tales pretensiones argumentando lo siguiente:

Con las consideraciones consignadas, de carácter Jurídico y Jurisprudencia se puede colegir que el parágrafo 2 del artículo 15 de la 91 de 1989 No crea la prima de servicios para los educadores, sino que reconoce el derecho a quienes venían percibiéndola con anterioridad a la vigencia de dicha Ley, la cual se encuentra a cargo de la Nación. El parágrafo segundo, debe interpretarse armónicamente con los artículos 1 y 2 ibídem, que establecen las responsabilidades económicas existentes de las entidades territoriales a la fecha de vigencia de la Ley 91 de 1989, haciendo extensivo a futuro los derechos adquiridos que existieren de las prestaciones sociales ya reconocidas a los educadores y/o docentes.

Es preciso tener en cuenta que cuando el Departamento del Huila en aplicación de la Ley 60 de 1993 y Ley 115 de 1994, descentralización de la educación, en ninguno de sus documentos aparece ni directamente ni implícitamente este emolumento como parte de obligación a cargo de la entidad territorial, mucho menos ha sido consignada en las diferentes normas que regula dicha descentralización, ni en los Decretos de salarios para docentes que se expiden anualmente por el Presidente de la República.

Fuerza concluir que la entidad territorial no tiene competencia para reconocer o negar esta pretensión (prima de servicio de docentes), conforme los mandatos constitucionales artículo 150 numeral 19 Literales e y f, desarrollado en la Ley 4 de 1992, que fija el marco normativo, los objetivos y criterios para regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y la competencia exclusiva en el ejecutivo Nacional, por tanto cualquier disposición normativa que contravenga la jerarquía de la Ley, se expondrá a carecer de efectos jurídicos.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

3.- Mediante resolución No. 900 de diciembre de 2013, la Secretaría de Educación Departamental confirmó la decisión adoptada mediante resolución No. 728 de 2013.

4.- A efecto de llegar a un acuerdo con el Departamento respecto al pago de tales prestaciones sociales y de agotar el requisito de procedibilidad para acudir al medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, la docente presentó mediante apoderado solicitud de conciliación ante la Procuraduría Judicial para asuntos Administrativos la cual se pone a consideración de los miembros del Comité para lo de su competencia.

ANALISIS y RECOMENDACIÓN DE LA APODERADA YEIMY LORENA RIVAS YUSTRES

Para entrar a analizar el asunto objeto de conciliación, basado en el principio rector de legalidad, me permito realizar las siguientes precisiones:

Con la conciliación los convocantes pretenden el reconocimiento y pago de la prima de servicio.

Como primera medida, es necesario precisar que nos encontramos frente a empleados públicos vinculados a este ente territorial, por homologación que se hizo a la planta de personal del Departamento, y que por disposición normativa le es aplicable el régimen especial contemplado en la ley 91 de 1989 y la ley 115 de 1994.

De acuerdo al régimen aplicable a los docentes relacionados no les asiste derecho a disfrutar de la bonificación por servicios prestados y la bonificación por recreación, prestaciones contenidas en los Decretos 1042 de 1978 y 1919 de 2002.

En efecto, el artículo 104 literal b del Decreto 1042 de 1978, en el artículo 104, consagra las excepciones a la aplicación dicho decreto, al disponer que "las



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

normas del presente Decreto no se aplicarán a las siguientes personas, cuya remuneración se establecerá en otras disposiciones: (...) b) al personal docente de los distintos organismos de la Rama Ejecutiva".

No sucede lo mismo con la prima de servicio, ya que la Ley 91 de 1989 en su artículo 15 parágrafo 2 reconoce expresamente en favor de los docentes el beneficio de la prima de servicios al señalar en el Parágrafo 2 que "El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no pagará las siguientes prestaciones, que continuarán a cargo de la Nación como entidad nominadora, en favor del personal nacional o nacionalizado, vinculado antes o con posterioridad al 31 de diciembre de 1989: Primas de navidad, de servicios y de alimentación, subsidio familiar, auxilio de transporte o movilización y vacaciones."

Con ello, se observa claramente en la norma transcrita, la intención del legislador de reconocer el derecho a la prima de servicios al personal docente nacional o nacionalizado de las instituciones educativas estatales.

Ahora bien, la Ley 91 de 1989, es un conjunto de normas expedidas con el fin de definir el régimen prestacional de los docentes estatales (nacional, nacionalizado y territorial) para lo cual se dispone la creación de un Fondo unificado nacional que asumirá en adelante la carga prestacional, fijando las siguientes reglas:

"Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.
(...)"

Conforme a la norma referida, los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, continuarían siendo regidos por el régimen prestacional que venían gozando en cada entidad territorial según las circunstancias particulares para cada caso, y por otro lado aquellos vinculados a partir del 1 de enero de 1990, se regirían por el régimen vigente aplicable a los empleados públicos del orden nacional, de conformidad con los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

De igual manera, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, establece en los mismos parámetros de la Ley 91 de 1989, lo siguiente:

- "Artículo 6º.- (...)El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. (...)."

Posteriormente, la Ley 115 de 1994 por medio de la cual se expide la Ley general de Educación, en su artículo 115, igualmente reitera que los docentes se regirán por lo establecido en la Ley 91 de 1989 en materia prestacional:

- "ARTICULO 115. Régimen especial de los educadores estatales. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente Ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente ley. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política, el estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y salarios legales. En ningún caso se podrán desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los educadores."



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

Del párrafo que preside, se desprende que el régimen salarial y prestacional docente, se define siguiendo las reglas establecidas en la Ley 91 de 1989, es decir, dependiendo de la vinculación del docente se puede establecer las normas que le son aplicables, así entonces para aquellos nacionalizados que se vincularon hasta el 31 de diciembre de 1989 se les respetará el régimen salarial y prestacional que venían gozando en la respectiva entidad territorial, y aquellos que se vincularon a partir del 1 de enero de 1990, se regirán por el régimen vigente aplicable a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

En un sentido semejante, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, establece:

“Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.”

Así, al existir una norma que contempla la Prima de Servicio como prestación y que hace parte del régimen especial al que están sujetos los docentes, los mismos si tienen derecho a percibir tal prestación laboral, máxime cuando la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido la inclusión de dicha prima al momento de liquidar otro tipo de prestaciones, tales como la cesantía de los servidores que tienen dicha calidad (sentencia del 25 de marzo de 2010 de la Sección Segunda, Subsección A, de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado), pero debe ser el Ministerio de Educación Nacional quien proceda a su reconocimiento, dado que para el año 1989 cuando entró en vigencia la Ley 91, el nominador era la Nación y con la descentralización administrativa de la educación de la Ley 60 de 1993 no se trasladó el pago de dicha obligación laboral a las entidades territoriales dado que ningún docente la venía percibiendo, como se puede establecer con los diferentes Decretos de Salarios, no obstante lo anterior, considero que el



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

Departamento en su calidad de nominador debe llamar en garantía a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Entidad que debe concurrir con los recursos toda vez que en el proceso de descentralización ordenado en la Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994, no entregó tal emolumento como obligación a cargo de la Entidad Territorial, tampoco aparece contemplada en normas que regula dicha descentralización, ni en los Decretos de Salarios para docentes que se expiden anualmente por el Presidente de la República. La norma que regula tal prestación se encuentra en la Ley 91 de 1989, que ordena estar a cargo de la Nación y consta como factor salarial para liquidar la pensión en el Decreto Ley 1045 de 1978, siendo la Nación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la obligada al pago de las pensiones de los docentes. En éstos términos considero que no se encuentra integrado al trámite de conciliación la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, entidad que hasta la fecha no se ha pronunciado conforme se verifica en la Resolución No. 1135 de 2012, acto administrativo que en la parte considerativa y resolutive se abstiene de contestar el derecho de petición de los aquí convocantes, para remitir al Ministerio de Educación Nacional a efectos que se pronuncie sobre la solicitud de reconocimiento y pago de la prima de servicios.

RECOMENDACIÓN

Con fundamento en lo expuesto, recomiendo a los miembros del Comité de Conciliación NO CONCILIAR hasta tanto se integre al trámite de Conciliación La Nación-Ministerio de Educación Nacional.

DECISIÓN:

Terminada la exposición de la apoderada, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden NO CONCILIAR el caso bajo análisis, teniendo en cuenta que la Nación Ministerio de Educación no ha dado autorización para su reconocimiento por consiguiente se debe llamar en garantía a la Nación Ministerio de Educación ya que es quien debe suministrar los recursos del Sistema General de Participación Educación.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

ARGUMENTOS COMITÉ:

NO. La presente decisión se adopta bajo el concepto, según formato único de gestión de comité de conciliación – FUGCC, Concepto NO, "OTROS" porque debe concurrir otra entidad para resolver el conflicto.

3.5.- EMPERATRIZ PERDOMO CRUZ

CUANTÍA: \$ 7.640.616

HECHOS Y PRETENSIONES:

1.-La señora EMPERATRIZ PERDOMO CRUZ perteneciente a la planta de docentes del Departamento del Huila solicitó el reconocimiento y pago de la Prima de Servicios, a partir de la fecha de su vinculación al Ramo de la Docencia Oficial, por considerar que tienen derecho con fundamento en el Decreto 2277 de 1979, Ley 91 de 1989 y Ley 115 de 1994.

Así mismo, solicita el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados desde que la obligación se hizo exigible así como la indexación o ajuste al valor sobre las sumas de dinero adeudadas por concepto de prima.

2.- Mediante resoluciones No. Resolución No. 728 de 2013, la Secretaría de Educación Departamental negó tales pretensiones argumentando lo siguiente:

Con las consideraciones consignadas, de carácter Jurídico y Jurisprudencia se puede colegir que el parágrafo 2 del artículo 15 de la 91 de 1989 No crea la prima de servicios para los educadores, sino que reconoce el derecho a quienes venían percibiéndola con anterioridad a la vigencia de dicha Ley, la cual se encuentra a cargo de la Nación. El parágrafo segundo, debe interpretarse armónicamente con los artículos 1 y 2 ibídem, que establecen las responsabilidades económicas existentes de las entidades territoriales a la fecha de vigencia de la Ley 91 de



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

1989, haciendo extensivo a futuro los derechos adquiridos que existieren de las prestaciones sociales ya reconocidas a los educadores y/o docentes.

Es preciso tener en cuenta que cuando el Departamento del Huila en aplicación de la Ley 60 de 1993 y Ley 115 de 1994, descentralización de la educación, en ninguno de sus documentos aparece ni directamente ni implícitamente este emolumento como parte de obligación a cargo de la entidad territorial, mucho menos ha sido consignada en las diferentes normas que regula dicha descentralización, ni en los Decretos de salarios para docentes que se expiden anualmente por el Presidente de la República.

Fuerza concluir que la entidad territorial no tiene competencia para reconocer o negar esta pretensión (prima de servicio de docentes), conforme los mandatos constitucionales artículo 150 numeral 19 Literales e y f, desarrollado en la Ley 4 de 1992, que fija el marco normativo, los objetivos y criterios para regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y la competencia exclusiva en el ejecutivo Nacional, por tanto cualquier disposición normativa que contravenga la jerarquía de la Ley, se expondrá a carecer de efectos jurídicos.

3.- Mediante resolución No. 900 de diciembre de 2013, la Secretaría de Educación Departamental confirmó la decisión adoptada mediante resolución No. 728 de 2013.

4.- A efecto de llegar a un acuerdo con el Departamento respecto al pago de tales prestaciones sociales y de agotar el requisito de procedibilidad para acudir al medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, la docente presentó mediante apoderado solicitud de conciliación ante la Procuraduría Judicial para asuntos Administrativos la cual se pone a consideración de los miembros del Comité para lo de su competencia.

ANALISIS y RECOMENDACIÓN DE LA APODERADA YEIMY LORENA RIVAS YUSTRES



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

Para entrar a analizar el asunto objeto de conciliación, basado en el principio rector de legalidad, me permito realizar las siguientes precisiones:

Con la conciliación los convocantes pretenden el reconocimiento y pago de la prima de servicio.

Como primera medida, es necesario precisar que nos encontramos frente a empleados públicos vinculados a este ente territorial, por homologación que se hizo a la planta de personal del Departamento, y que por disposición normativa le es aplicable el régimen especial contemplado en la ley 91 de 1989 y la ley 115 de 1994.

De acuerdo al régimen aplicable a los docentes relacionados no les asiste derecho a disfrutar de la bonificación por servicios prestados y la bonificación por recreación, prestaciones contenidas en los Decretos 1042 de 1978 y 1919 de 2002.

En efecto, el artículo 104 literal b del Decreto 1042 de 1978, en el artículo 104, consagra las excepciones a la aplicación dicho decreto, al disponer que "las normas del presente Decreto no se aplicarán a las siguientes personas, cuya remuneración se establecerá en otras disposiciones: (...) b) al personal docente de los distintos organismos de la Rama Ejecutiva".

No sucede lo mismo con la prima de servicio, ya que la Ley 91 de 1989 en su artículo 15 parágrafo 2 reconoce expresamente en favor de los docentes el beneficio de la prima de servicios al señalar en el Parágrafo 2 que "El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no pagará las siguientes prestaciones, que continuarán a cargo de la Nación como entidad nominadora, en favor del personal nacional o nacionalizado, vinculado antes o con posterioridad al 31 de diciembre de 1989: Primas de navidad, de servicios y de alimentación, subsidio familiar, auxilio de transporte o movilización y vacaciones."



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

Con ello, se observa claramente en la norma transcrita, la intención del legislador de reconocer el derecho a la prima de servicios al personal docente nacional o nacionalizado de las instituciones educativas estatales.

Ahora bien, la Ley 91 de 1989, es un conjunto de normas expedidas con el fin de definir el régimen prestacional de los docentes estatales (nacional, nacionalizado y territorial) para lo cual se dispone la creación de un Fondo unificado nacional que asumirá en adelante la carga prestacional, fijando las siguientes reglas:

“Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

(...)”

Conforme a la norma referida, los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, continuarían siendo regidos por el régimen prestacional que venían gozando en cada entidad territorial según las circunstancias particulares para cada caso, y por otro lado aquellos vinculados a partir del 1 de enero de 1990, se regirán por el régimen vigente aplicable a los empleados públicos del orden nacional, de conformidad con los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

De igual manera, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, establece en los mismos parámetros de la Ley 91 de 1989, lo siguiente:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

- "Artículo 6º.- (...)El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. (...)."

Posteriormente, la Ley 115 de 1994 por medio de la cual se expide la Ley general de Educación, en su artículo 115, igualmente reitera que los docentes se regirán por lo establecido en la Ley 91 de 1989 en materia prestacional:

- "ARTICULO 115. Régimen especial de los educadores estatales. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente Ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente ley. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política, el estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y salarios legales. En ningún caso se podrán desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los educadores."

Del párrafo que preside, se desprende que el régimen salarial y prestacional docente, se define siguiendo las reglas establecidas en la Ley 91 de 1989, es decir, dependiendo de la vinculación del docente se puede establecer las normas que le son aplicables, así entonces para aquellos nacionalizados que se vincularon hasta el 31 de diciembre de 1989 se les respetará el régimen salarial y prestacional que venían gozando en la respectiva entidad territorial, y aquellos que se vincularon a partir del 1 de enero de 1990, se regirían por el régimen vigente aplicable a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

En un sentido semejante, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, establece:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

"Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley."

Así, al existir una norma que contempla la Prima de Servicio como prestación y que hace parte del régimen especial al que están sujetos los docentes, los mismos si tienen derecho a percibir tal prestación laboral, máxime cuando la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido la inclusión de dicha prima al momento de liquidar otro tipo de prestaciones, tales como la cesantía de los servidores que tienen dicha calidad (sentencia del 25 de marzo de 2010 de la Sección Segunda, Subsección A, de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado), pero debe ser el Ministerio de Educación Nacional quien proceda a su reconocimiento, dado que para el año 1989 cuando entró en vigencia la Ley 91, el nominador era la Nación y con la descentralización administrativa de la educación de la Ley 60 de 1993 no se trasladó el pago de dicha obligación laboral a las entidades territoriales dado que ningún docente la venía percibiendo, como se puede establecer con los diferentes Decretos de Salarios, no obstante lo anterior, considero que el Departamento en su calidad de nominador debe llamar en garantía a la NACION-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Entidad que debe concurrir con los recursos toda vez que en el proceso de descentralización ordenado en la Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994, no entregó tal emolumento como obligación a cargo de la Entidad Territorial, tampoco aparece contemplada en normas que regula dicha descentralización, ni en los Decretos de Salarios para docentes que se expiden anualmente por el Presidente de la República. La norma que regula tal prestación se encuentra en la Ley 91 de 1989, que ordena estar a cargo de la Nación y consta como factor salarial para liquidar la pensión en el Decreto Ley 1045 de 1978, siendo la Nación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la obligada al pago de las pensiones de los docentes. En éstos términos considero que no se encuentra integrado al trámite de conciliación la NACION-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, entidad que hasta la fecha no se ha pronunciado conforme se



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

verifica en la Resolución No. 1135 de 2012, acto administrativo que en la parte considerativa y resolutive se abstiene de contestar el derecho de petición de los aquí convocantes, para remitir al Ministerio de Educación Nacional a efectos que se pronuncie sobre la solicitud de reconocimiento y pago de la prima de servicios.

RECOMENDACIÓN

Con fundamento en lo expuesto, recomiendo a los miembros del Comité de Conciliación NO CONCILIAR hasta tanto se integre al trámite de Conciliación La Nación-Ministerio de Educación Nacional.

DECISIÓN:

Terminada la exposición de la apoderada, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden NO CONCILIAR el caso bajo análisis, teniendo en cuenta que la Nación Ministerio de Educación no ha dado autorización para su reconocimiento por consiguiente se debe llamar en garantía a la Nación Ministerio de Educación ya que es quien debe suministrar los recursos del Sistema General de Participación Educación.

ARGUMENTOS COMITÉ:

NO. La presente decisión se adopta bajo el concepto, según formato único de gestión de comité de conciliación – FUGCC, Concepto NO, "OTROS" porque debe concurrir otra entidad para resolver el conflicto.

3.6.- SAIDA FREDY SERRATO

CUANTÍA: \$ 4.932.511

HECHOS Y PRETENSIONES:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

1.- La señora SAIDA FREDY SERRATO perteneciente a la planta de docentes del Departamento del Huila solicitó el reconocimiento y pago de la Prima de Servicios, a partir de la fecha de su vinculación al Ramo de la Docencia Oficial, por considerar que tienen derecho con fundamento en el Decreto 2277 de 1979, Ley 91 de 1989 y Ley 115 de 1994.

Así mismo, solicita el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados desde que la obligación se hizo exigible así como la indexación o ajuste al valor sobre las sumas de dinero adeudadas por concepto de prima.

2.- Mediante resoluciones No. Resolución No. 181 del 18 de marzo de 2013, la Secretaría de Educación Departamental negó tales pretensiones argumentando lo siguiente:

Con las consideraciones consignadas, de carácter Jurídico y Jurisprudencia se puede colegir que el parágrafo 2 del artículo 15 de la 91 de 1989 No crea la prima de servicios para los educadores, sino que reconoce el derecho a quienes venían percibiéndola con anterioridad a la vigencia de dicha Ley, la cual se encuentra a cargo de la Nación. El parágrafo segundo, debe interpretarse armónicamente con los artículos 1 y 2 ibídem, que establecen las responsabilidades económicas existentes de las entidades territoriales a la fecha de vigencia de la Ley 91 de 1989, haciendo extensivo a futuro los derechos adquiridos que existieren de las prestaciones sociales ya reconocidas a los educadores y/o docentes.

Es preciso tener en cuenta que cuando el Departamento del Huila en aplicación de la Ley 60 de 1993 y Ley 115 de 1994, descentralización de la educación, en ninguno de sus documentos aparece ni directamente ni implícitamente este emolumento como parte de obligación a cargo de la entidad territorial, mucho menos ha sido consignada en las diferentes normas que regula dicha descentralización, ni en los Decretos de salarios para docentes que se expiden anualmente por el Presidente de la República.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

Fuerza concluir que la entidad territorial no tiene competencia para reconocer o negar esta pretensión (prima de servicio de docentes), conforme los mandatos constitucionales artículo 150 numeral 19 Literales e y f, desarrollado en la Ley 4 de 1992, que fija el marco normativo, los objetivos y criterios para regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y la competencia exclusiva en el ejecutivo Nacional, por tanto cualquier disposición normativa que contravenga la jerarquía de la Ley, se expondrá a carecer de efectos jurídicos.

3.- Mediante resolución No. 1060 del 06 de diciembre de 2013, la Secretaría de Educación Departamental confirmó la decisión adoptada mediante resolución No. 019 de 2013.

4.- A efecto de llegar a un acuerdo con el Departamento respecto al pago de tales prestaciones sociales y de agotar el requisito de procedibilidad para acudir al medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, la docente presentó mediante apoderado solicitud de conciliación ante la Procuraduría Judicial para asuntos Administrativos la cual se pone a consideración de los miembros del Comité para lo de su competencia.

ANALISIS y RECOMENDACIÓN DE LA APODERADA YEIMY LORENA RIVAS YUSTRES

Para entrar a analizar el asunto objeto de conciliación, basado en el principio rector de legalidad, me permito realizar las siguientes precisiones:

Con la conciliación los convocantes pretenden el reconocimiento y pago de la prima de servicio.

Como primera medida, es necesario precisar que nos encontramos frente a empleados públicos vinculados a este ente territorial, por homologación que se hizo a la planta de personal del Departamento, y que por disposición normativa le es aplicable el régimen especial contemplado en la ley 91 de 1989 y la ley 115 de 1994.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

De acuerdo al régimen aplicable a los docentes relacionados no les asiste derecho a disfrutar de la bonificación por servicios prestados y la bonificación por recreación, prestaciones contenidas en los Decretos 1042 de 1978 y 1919 de 2002.

En efecto, el artículo 104 literal b del Decreto 1042 de 1978, en el artículo 104, consagra las excepciones a la aplicación dicho decreto, al disponer que "las normas del presente Decreto no se aplicarán a las siguientes personas, cuya remuneración se establecerá en otras disposiciones: (...) b) al personal docente de los distintos organismos de la Rama Ejecutiva".

No sucede lo mismo con la prima de servicio, ya que la Ley 91 de 1989 en su artículo 15 párrafo 2 reconoce expresamente en favor de los docentes el beneficio de la prima de servicios al señalar en el Parágrafo 2 que "El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no pagará las siguientes prestaciones, que continuarán a cargo de la Nación como entidad nominadora, en favor del personal nacional o nacionalizado, vinculado antes o con posterioridad al 31 de diciembre de 1989: Primas de navidad, de servicios y de alimentación, subsidio familiar, auxilio de transporte o movilización y vacaciones."

Con ello, se observa claramente en la norma transcrita, la intención del legislador de reconocer el derecho a la prima de servicios al personal docente nacional o nacionalizado de las instituciones educativas estatales.

Ahora bien, la Ley 91 de 1989, es un conjunto de normas expedidas con el fin de definir el régimen prestacional de los docentes estatales (nacional, nacionalizado y territorial) para lo cual se dispone la creación de un Fondo unificado nacional que asumirá en adelante la carga prestacional, fijando las siguientes reglas:

"Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se registrarán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

(...)"

Conforme a la norma referida, los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, continuarían siendo regidos por el régimen prestacional que venían gozando en cada entidad territorial según las circunstancias particulares para cada caso, y por otro lado aquellos vinculados a partir del 1 de enero de 1990, se registrarán por el régimen vigente aplicable a los empleados públicos del orden nacional, de conformidad con los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

De igual manera, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, establece en los mismos parámetros de la Ley 91 de 1989, lo siguiente:

- "Artículo 6º.- (:..)El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. (...)."

Posteriormente, la Ley 115 de 1994 por medio de la cual se expide la Ley general de Educación, en su artículo 115, igualmente reitera que los docentes se registrarán por lo establecido en la Ley 91 de 1989 en materia prestacional:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

- "ARTICULO 115. Régimen especial de los educadores estatales. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente Ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente ley. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política, el estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y salarios legales. En ningún caso se podrán desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los educadores."

Del párrafo que preside, se desprende que el régimen salarial y prestacional docente, se define siguiendo las reglas establecidas en la Ley 91 de 1989, es decir, dependiendo de la vinculación del docente se puede establecer las normas que le son aplicables, así entonces para aquellos nacionalizados que se vincularon hasta el 31 de diciembre de 1989 se les respetará el régimen salarial y prestacional que venían gozando en la respectiva entidad territorial, y aquellos que se vincularon a partir del 1 de enero de 1990, se regirían por el régimen vigente aplicable a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

En un sentido semejante, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, establece:

"Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley."

Así, al existir una norma que contempla la Prima de Servicio como prestación y que hace parte del régimen especial al que están sujetos los docentes, los mismos si tienen derecho a percibir tal prestación laboral, máxime cuando la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido la inclusión de dicha prima al momento de liquidar otro tipo de prestaciones, tales como la cesantía de los servidores que



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

tienen dicha calidad (sentencia del 25 de marzo de 2010 de la Sección Segunda, Subsección A, de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado), pero debe ser el Ministerio de Educación Nacional quien proceda a su reconocimiento, dado que para el año 1989 cuando entró en vigencia la Ley 91, el nominador era la Nación y con la descentralización administrativa de la educación de la Ley 60 de 1993 no se trasladó el pago de dicha obligación laboral a las entidades territoriales dado que ningún docente la venía percibiendo, como se puede establecer con los diferentes Decretos de Salarios, no obstante lo anterior, considero que el Departamento en su calidad de nominador debe llamar en garantía a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Entidad que debe concurrir con los recursos toda vez que en el proceso de descentralización ordenado en la Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994, no entregó tal emolumento como obligación a cargo de la Entidad Territorial, tampoco aparece contemplada en normas que regula dicha descentralización, ni en los Decretos de Salarios para docentes que se expiden anualmente por el Presidente de la República. La norma que regula tal prestación se encuentra en la Ley 91 de 1989, que ordena estar a cargo de la Nación y consta como factor salarial para liquidar la pensión en el Decreto Ley 1045 de 1978, siendo la Nación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la obligada al pago de las pensiones de los docentes. En éstos términos considero que no se encuentra integrado al trámite de conciliación la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, entidad que hasta la fecha no se ha pronunciado conforme se verifica en la Resolución No. 1135 de 2012, acto administrativo que en la parte considerativa y resolutive se abstiene de contestar el derecho de petición de los aquí convocantes, para remitir al Ministerio de Educación Nacional a efectos que se pronuncie sobre la solicitud de reconocimiento y pago de la prima de servicios.

RECOMENDACIÓN

Con fundamento en lo expuesto, recomiendo a los miembros del Comité de Conciliación **NO CONCILIAR** hasta tanto se integre al trámite de Conciliación La Nación-Ministerio de Educación Nacional.

DECISIÓN:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

Terminada la exposición de la apoderada, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden **NO CONCILIAR** el caso bajo análisis, teniendo en cuenta que la Nación Ministerio de Educación no ha dado autorización para su reconocimiento por consiguiente se debe llamar en garantía a la Nación Ministerio de Educación ya que es quien debe suministrar los recursos del Sistema General de Participación Educación. ✓

ARGUMENTOS COMITÉ:

NO. La presente decisión se adopta bajo el concepto, según formato único de gestión de comité de conciliación – FUGCC, Concepto **NO**, "OTROS" porque debe concurrir otra entidad para resolver el conflicto. ✓

3.7.- DEPARTAMENTO DEL HUILA – JUAN CARDENAS CHAVES ✓

CUANTÍA: \$ 222.943.667.74.00

PRESUNCIONES

Nuevamente someto a su estudio el presente caso, ya que el día 10 de marzo de 2014, fue resuelto por el Director de Departamento Administrativo Jurídico, que hasta tanto el Comité de conciliación no decida si se debe o no iniciar la acción de repetición, no puede entrar a decidir el impedimento.

Es de aclarar que ya había presentado y explicado el presente asunto ante el Comité, pero como no hice recomendación en razón a mi impedimento, el comité decidió no estudiarlo.

Indico al Comité, que me abstengo de presentar recomendación en razón a mi insistencia en el impedimento presentado en la ficha inicial, considerando que al haber ocurrido los hechos en el gobierno del Ingeniero Juan Cárdenas, quien me vinculo al departamento, y con quien reitero guardo una inmensa gratitud,



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

admiración, respeto y amistad, no estoy en condiciones de analizar situaciones que lo puedan involucrar en procesos en su contra, de así decidirlo el comité de conciliación.

Cito las normas que disponen que la acción de repetición debe ser estudiada por el Comité de Conciliación.

“• Decreto 1214 de 2002. “Artículo 12. de la acción de repetición. Los Comités de Conciliación de las entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición.

Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente del pago total de una condena, de una conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a 3 meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición”.

Dejo constancias igualmente, que por ser al comité de conciliación a quien corresponde su estudio, presente los elementos necesarios que le permitirán tomar la decisión que determine si se inicia o no la repetición.

Insisto en el estudio, ya que los términos están corriendo, y de no tomar una decisión oportuna, quien resultaría sancionado con destitución es el representante legal

• Ley 678 de 2001: “Artículo 8o. legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción de repetición la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la ley.

Si no se iniciare la acción de repetición en el término y por la entidad facultada que se menciona anteriormente, podrá ejercitar la acción de repetición:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

1. El Ministerio Público.

2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación, cuando la perjudicada con el pago sea una entidad pública del orden nacional.

PARÁGRAFO 1o. Cualquier persona podrá requerir a las entidades legitimadas para que instauren la acción de repetición, la decisión que se adopte se comunicará al requirente.

PARÁGRAFO 2o. Si el representante legal de la entidad directamente Perjudicada con el pago de la suma de dinero a que se refiere este artículo no iniciare la acción en el término estipulado, estará incurso en causal de destitución.”.

4.7. Caducidad.

• Ley 678 de 2001: “Artículo 11. Caducidad. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública.

HECHOS

La señora Liliana Supelano Valencia en su calidad de concejal del municipio de Gigante para el año 2002 fue amenazada por la FARC, al igual que al alcalde de la localidad y demás miembros del Concejo. De ello informaron al Ministerio de justicia, al Departamento del Huila, y al gobierno central y municipal. Ministerio de defensa y otras entidades relacionadas.

El Departamento por carecer de competencia decide que no puede aceptar renuncias a los concejales, así como acatar las disposiciones legales que para la época estaban vigentes como el decreto 1386 de 2002, decreto 2742 de 2002, c presidencial 08 de 2002.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

El departamento mantuvo constante comunicación con el Ministerio, le informó a los Concejales que podían seguir sesionando en el municipio de Neiva, se realizaron consejos de gobierno en el cual se trató el tema y finalmente en diciembre de 2002 la FARC, asesina a la concejal Supelano Valencia.

En razón de los hechos narrados, sus familiares demandan en Acción de Reparación Directa a la Nación, Ministerio de defensa, Ministerio de Justicia, Departamento del Huila y municipio de Gigante. Proceso tramitado en el juzgado Tercero Administrativo que en primera instancia condena a pagar solidariamente. Sentencia apelada y confirmada por el Honorable Tribunal Administrativo del Huila el trece de junio de dos mil doce.

El departamento paga el 4 de marzo de 2013 la suma de 257.217.519.74

El Tesorero envía los documentos correspondientes a la doctora Sandra Elizabeth mediante oficio TD No.100 de marzo de 2013, a fin de que el Comité de Conciliación estudie y ordene si hay lugar a proceso de repetición, haciendo entrega de dichos documentos el 2 de abril de 2013, para que se elabore la correspondiente ficha y se presente al Comité.

Para facilitar su estudio, se transcribe algunos de los decretos, en los que el Comité puede verificar las directrices de entonces para resolver las amenazas que en la época se hacían contra los concejales, funcionarios de la Rama judicial y otras instancias gubernamentales.

DECRETO 1386 DE 2002

(Julio 5)

"Por el cual se dictan medidas para brindar protección a alcaldes, concejales y personeros municipales".

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial de las conferidas por los artículos 2°, 188 y 189 numeral 11 de la Constitución Política, en concordancia



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

con el artículo 122 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, y

CONSIDERANDO:

Que grupos armados al margen de la ley han efectuado en forma masiva graves amenazas contra la vida de los principales funcionarios de la administración de las entidades territoriales;

Que vistos los últimos acontecimientos sucedidos en el país, de los cuales han resultado alcaldes, concejales y personeros muertos o lesionados y otros que se han visto forzados a salir de sus municipios hacia otros lugares por amenazas, es indispensable la organización de un mecanismo especial para su protección, de tal manera que se pueda garantizar su trabajo en condiciones de independencia y libertad;

Que se debe fortalecer la acción gubernamental encaminada a tomar medidas de seguridad tendientes a garantizar la vida, la libertad e independencia de los alcaldes, concejales y personeros municipales como una manera de proteger el sistema democrático establecido en la Carta Política;

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 296 y 315 de la Constitución Política, las instrucciones del Gobernador para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, sus actos y órdenes se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los actos y órdenes de los alcaldes;

Que la Corte Constitucional en sentencia C-643 de 1999, señaló que en materia de orden público se configura una relación jerárquica entre el mandatario local y Seccional;

Que la Ley 418 de 1997, prorrogada y adicionada por la Ley 548 de 1999, dispuso la creación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al igual que los Fondos Territoriales de Seguridad, con el fin de establecer mecanismos y obtener recursos que permitan a la Nación y a las entidades territoriales, preservar la tranquilidad y garantizar la seguridad y convivencia de la comunidad;

Que de conformidad con el artículo 122 de la Ley 418 de 1997, los recursos de Fonsecon deben destinarse, entre otras actividades, a la protección de personas amenazadas;



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

Que según lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública, para lo cual pueden realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública,

Ver Decreto Nacional 1873 de 1992 , Ver Directiva Presidencial 08 de 2002

DECRETA:

Artículo 1°. Modificado por el art. 1 del Decreto Nacional 2742 de 2002 El Ministerio del Interior brindará protección a Alcaldes, Personeros y Concejales que por razón del ejercicio de sus cargos se encuentren en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad.

Este programa será coordinado por la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Artículo 2°. Modificado por el art. 2 del Decreto Nacional 2742 de 2002 Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos. Para efectos de evaluar los estudios técnicos de nivel de riesgo y grado de amenaza contra alcaldes, concejales y personeros y para recomendar las medidas de protección a implementarse en cada caso particular, se crea el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER) integrado de la siguiente manera:

- a) El Viceministro del Interior o su delegado, quien lo presidirá;
- b) El Director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, o su delegado;
- c) El Director General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior;
- d) El Director del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH o su delegado;
- e) El Director General de la Policía Nacional o su delegado.

Además de los enunciados, acudirán, como invitados con voz, el Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, el Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Concejales y el Presidente de la Asociación Nacional de Personeros.

Parágrafo 1°. La Secretaría Ejecutiva del Comité será ejercida por el Coordinador del Grupo de Protección a Testigos y Personas Amenazadas de la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

Parágrafo 2°. En su primera sesión, el CRER se dará su propio reglamento que deberá contener como mínimo:

1. Organización de la Agenda.
2. Metodología de presentación de casos.
3. Duración de las sesiones.
4. Cronograma de actividades para la consecución de recursos.
5. Deberes de sus integrantes.

Artículo 3°. De las reuniones del Comité. El Comité se reunirá ordinariamente cada mes, previa convocatoria efectuada por el Viceministro del Interior o por el Director General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior y extraordinariamente cuando estas personas lo consideren necesario.

Parágrafo 1°. El CRER sesionará en la sede de la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Parágrafo 2°. Las recomendaciones del Comité se adoptarán por mayoría absoluta de sus miembros.

Artículo 4°. Funciones del Comité. Son funciones del Comité, las siguientes:

- a) Evaluar los casos particulares que le sean presentados por el Grupo de Protección a Testigos y Personas Amenazadas de la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior;
- b) Analizar los estudios técnicos de nivel de riesgo y grado de amenaza;
- c) Recomendar las medidas de protección que se consideren pertinentes;
- d) Poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los hechos fundamento de la solicitud de protección cuando de ellos se infiera que se ha cometido un delito que deba investigarse;
- e) Acompañar a la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior en la gestión de los recursos necesarios para desarrollar el programa de protección;
- f) Exigir al Grupo de Protección a Testigos y Personas Amenazadas información periódica sobre las medidas de protección adoptadas y sus efectos;
- g) Hacer seguimiento a la implementación de las medidas recomendadas.

Artículo 5°. Otorgamiento de medidas de protección. Las medidas de protección recomendadas por el CRER serán implementadas por el Ministerio del Interior a través de la Dirección General para los Derechos Humanos.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

El Director General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, podrá adoptar sin necesidad de recomendación previa, en casos de emergencia manifiesta, medidas de protección para los destinatarios del presente decreto e informará de las mismas al CRER en la siguiente sesión, con el fin de que este recomiende las medidas definitivas.

Artículo 6°. De las medidas de protección. Se podrán suministrar las siguientes medidas de protección:

- a) Suministro de chalecos antibalas;
- b) Suministro de equipos de comunicación;
- c) Esquemas de protección.

Artículo 7°. Traslado del despacho de los alcaldes. El traslado de la sede del despacho de los alcaldes, por graves motivos de orden público, podrá ser autorizado por el respectivo gobernador.

Artículo 8°. Del reglamento. El Ministerio del Interior elaborará el Reglamento del Programa de Protección a Alcaldes, Personeros y Concejales.

Artículo 9°. Modificado por el art. 3 del Decreto Nacional 2742 de 2002 De los recursos. Las actividades propias del Programa de Protección al que se refiere este Decreto se financiarán con recursos de los fondos de seguridad de los respectivos departamentos y municipios, del Fondo Nacional para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, de programas de cooperación internacional en los términos previstos en los convenios o acuerdos respectivos y donaciones para este propósito.

Parágrafo 1°. En armonía con lo previsto por los artículos 7° de la Ley 489 de 1998 y 4° de la Ley 136 de 1994, en la aplicación de los recursos asignados al programa se hará conforme a los criterios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad.

Parágrafo 2°. Para efectos de los recursos que aporta el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior presentará un proyecto al Comité Evaluador de Fonsecon, conforme a los procedimientos propios de éste.

Artículo 10. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

Dado en Bogotá, D. C., a 5 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro del Interior,

Armando Estrada Villa.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos.

El Director del Departamento Administrativo de Seguridad,

Coronel Germán Gustavo Jaramillo Piedrahita.

DECRETO 2742 DE 2002

(Noviembre 25)

Derogado por el art. 53, Decreto Nacional 4912 de 2011

Por el cual se modifica el Decreto número 1386 de 2002.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las facultades constitucionales, en especial las conferidas por los artículos 2°, 188 y 189 numeral 11 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 122 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto número 1386 del 5 de julio de 2002, el Gobierno Nacional adoptó medidas para brindar protección a los Alcaldes, Concejales y Personeros municipales, por las graves amenazas y atentados que grupos armados al margen de la ley han efectuado contra su vida, por cuya causa, muchos de ellos, se han visto obligados a abandonar sus municipios de origen;

Que en idéntica situación a la descrita, se encuentra un gran número de diputados del país, a quienes el Gobierno Nacional debe cobijar con las medidas de protección adoptadas para alcaldes, concejales y personeros,

DECRETA:

Artículo 1°. Modifícase el artículo primero del Decreto 1386 de 2002, el cual quedará así:

"Artículo 1°. El Ministerio del Interior brindará protección a alcaldes, diputados, concejales y personeros que por razón del ejercicio de sus cargos se encuentren en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

Este programa será coordinado por la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior".

Artículo 2°. Modifícase el artículo 2° del Decreto 1386 de 2002, el cual quedará así:

"Artículo 2°. Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos. Para efectos de evaluar los estudios técnicos de nivel de riesgo y grado de amenaza contra alcaldes, diputados, concejales y personeros y para recomendar las medidas de protección a implementarse en cada caso particular, se crea el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER) integrado de la siguiente manera:

- a) El Viceministro del Interior o su delegado, quien lo presidirá;
- b) El Director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, o su delegado;
- c) El Director General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior;
- d) El Director del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH o su delegado;
- e) El Director General de la Policía Nacional o su delegado.

Además de los enunciados, acudirán, como invitados con voz, el Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, el Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Concejales, el Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Diputados y el Presidente de la Asociación Nacional de Personeros.

Parágrafo 1°. La Secretaría Ejecutiva del Comité será ejercida por el Coordinador del Grupo de Protección a Testigos y Personas Amenazadas de la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior o quien haga sus veces.

Parágrafo 2°. En su primera sesión, el CRER se dará su propio reglamento que deberá contener como mínimo:

- 1. Organización de la Agenda.
- 2. Metodología de presentación de casos.
- 3. Duración de las sesiones.
- 4. Cronograma de actividades para la consecución de recursos.
- 5. Deberes de sus integrantes".

Artículo 3°. Modifícase el artículo noveno del Decreto 1386 de julio 5 de 2002, el cual quedará así:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

"Artículo 9°. De los recursos. Las actividades propias del programa de protección a las que se refiere este decreto se financiarán con recursos de los Fondos de Seguridad de los respectivos Departamentos y Municipios, del Fondo Nacional para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, de Programas de Cooperación Internacional en los términos previstos en los convenios o acuerdos respectivos, de donaciones para este propósito y de las apropiaciones que se incluyan en el Presupuesto General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación.

Parágrafo 1°. En armonía con lo previsto por los artículos 7° de la Ley 489 de 1998 y 4° de la Ley 136 de 1994, la aplicación de los recursos asignados al programa se hará conforme a los criterios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad.

Parágrafo 2°. Para efectos de los recursos que aporta el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior presentará un proyecto al Comité Evaluador de Fonsecon, conforme a los procedimientos propios de este".

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C, a 25 de noviembre de 2002.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior,

Fernando Londoño Hoyos.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Roberto Junguito Bonnet.

El Director del Departamento Administrativo de Seguridad,

Jorge Aurelio Noguera Cotes.

NOTA: Publicado en el Diario Oficial 45011 de Noviembre 26 de 2002.

PARA EFECTOS DE SU ANALISIS

MARCO CONCEPTUAL

Según el diccionario de la real academia de la lengua española establece que repetir es reclamar contra terceros por quien pagó el quebranto que padeció el reclamante.

ELEMENTOS ESENCIALES



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

Insistentemente el Consejo de Estado se ha pronunciado respecto de los elementos que conforman esta acción sintetizándolos así:

1. La calidad de agente del Estado y la conducta desplegada como tal, determinante del daño causado a un tercero, cuando se haya causado una condena u obligación de pagar una suma de dinero derivada de un acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier otra forma de terminación de un conflicto.

2. La existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto.

3. El pago realizado por parte de la Administración

La calificación de la conducta del agente como dolosa o gravemente culposa.

Los tres primeros han sido reconocidos por su carácter objetivo. La calificación de la conducta del agente de gravemente culposa o dolosa, es de carácter subjetivo, por lo tanto, se debe analizar con base en la norma vigente en la fecha de presentación de la demanda.

MARCO JURIDICO.

La acción de repetición tiene su soporte constitucional en el artículo 90 cuyo tenor literal es el siguiente:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.”

CULPA GRAVE: El artículo 6 estipula lo siguiente

La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes razones:

1. Violación manifiesta o inexcusable de las normas de derecho.
2. Carencia o abuso de competencia para proferir decisión anulada.
3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativo determinada por error inexcusable.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal.

Ley 1437 de 2011

El código contencioso administrativo dispuso en el título III "Medios de Control" la acción de repetición:

Artículo 142 C.C.A. REPETICION: Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.

La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.

Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.

OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA

Según el literal i del artículo 164 de la ley 1437 de 2011 se establece:

"Cuando se pretende repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación y otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este código"

INFORME SOBRE EL ASUNTO A TRATAR

En la carpeta designada para gestiones entre 2002-10-01-y 2002-11-26 folios 115- Existe un oficio de la Secretaria de Gobierno al Director Seccional Das en donde se solicita colaboración para la realización de un estudio de riesgo y grado de amenaza a los funcionarios municipales que han solicitado vinculación al



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

programa de protección del Ministerio de Interior, pero no se encuentra ninguno que pertenezca al municipio de Gigante.

Se encuentra informe sobre la situación de los concejales del Departamento del Huila, en donde se hace mención a los Concejos municipales amenazados en el Huila y se hacen propuestas de los que es urgente, se solicita concretar al Director del Das, al comandante de la Novena Brigada, al Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y al comandante Policía Huila. La respuesta no aparece en la carpeta.

En la carpeta designada para gestiones periodo 2001 -12-04 entre 2002 -10-23 Folios 115, aparece una carta al Ministro del interior y de justicia, cuya referencia es Programa de protección de Alcaldes, Concejales y personeros municipales. En ella se manifiesta la urgencia en revisar nuevamente el programa porque existen imposibilidades físicas insalvables para proteger la vida, de 317 concejales. Cabe anotar que la mayoría de esto vivían en zona rural, lo que no es predicable de la concejal de Gigante.

En la carpeta para el periodo entre 2002 -12-30 y 2003-12-13- folios 201 folios se encuentra un oficio donde la Secretaria de Gobierno informa a un funcionario amenazado que el Ministerio del interior a través de la Dirección General para los Derechos Humanos ofrece el programa de protección a funcionarios amenazados y del cual le envía un formato DGDH-ACP.

También se realizaron numerosos estudios de riesgo para ver en que escala se podrían ubicar los diferentes funcionarios que manifestaban amenazas en contra de su vida y así mismo proporcionarles seguridad, estos estudios ninguno se hizo a los concejales de Gigante en General Según el manual de funciones del gobernador que interesan para el caso, se ubican en las números 14 y 15; y de la Secretaria de Gobierno la función especial 8 y 10.

Resulta vital solicitar a la Secretaria de Gobierno allegue al Comité, la circular a la que se ha hecho referencia en relación con las directrices a los concejales y al alcalde de la época, para lograr un análisis más ponderado en cuanto a la competencia y actividades desplegadas.

No obstante huelga advertir, que la sentencia se fundamentó en la falta de vigilancia efectiva, de haber proporcionado custodia, apoyo, a la concejala, por parte de las entidades demandadas, (Ministerio, Departamento, municipio),



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

quienes obraron con negligencia en cuanto que tenían publico conocimiento, obrando con negligencia e incumplimiento al deber de cuidado y protección especial que estaba necesitando.

Se ha hecho gestión a fin de que se nos suministre los registro que existen en el archivo en relación con los concejales de Gigante, resultando inútil que la Secretaria de Gobierno los suministre, razón por la cual de considerarlo en Comité, solicito se pidan directamente a dicha Secretaria.

Insisto, que para el año 2002 y 2003, ante la amenaza de que fueron víctimas los servidores públicos de las administraciones municipales y judiciales, el alcalde de Gigante, solicito al Departamento concepto en relación a la renuncia masiva de los concejales del municipio de Gigante. El Departamento respondió que de acuerdo a la ley no se podían aceptar renunciaciones colectivas que fueran producto de coacción; igualmente que quien debía aceptar la renuncia era el presidente del Consejo, y si no estaban sesionando debían hacerlo ante el alcalde.

El departamento en razón a que no tenía la competencia para tomar decisiones muto propio, excepto las de apoyo, escribió sendos oficios al Ministerio solicitando protección y orientación en lo que debía hacerse, ya que la competencia es de la nación y a ella están adscritas las fuerzas militares. El Departamento no tenía recursos de los que pudiera disponerse, ya que estas amenazas fueron masivas para la época. Sin embargo se hicieron muchos consejos de gobierno, la administración departamental citó a los concejales para tomar medidas, ellos participaron en las reuniones, y se llegó al acuerdo de que se trasladaban a sesionar en el municipio de Neiva, en donde se les podría brindar un poco de seguridad mientras recibían instrucciones del Ministerio.

La sentencia hace la manifestación al condenar a todas las entidades de que incurrieron en omisión por negligencia, pero no indica específicamente en que forma falló el Departamento, si no que lo hace en forma general, en razón a que el Estado estaba obligado a brindar protección a estas personas amenazadas.

Por la situación de orden público que se vivía en el momento, ante lo sorpresivo de la situación, el Ministerio profirió los decretos señalados en esta ficha, pero hasta ese momento se empezaban a reglamentar, es decir que el Departamento no contaba con una política ni competencia determinante que le permitiera actuar,



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

sin ir en contravía a la ley, en razón de sus competencias, y disponibilidad de recursos. No obstante dentro de sus posibilidades, considero no actuó negligentemente como lo dice la sentencia, y en este orden, considero que no puede iniciarse un proceso de repetición, pues los elementos de culpa grave o dolo no se configuran.

DECISION DEL COMITÉ: Terminada la exposición de la apoderada MARTHA CECILIA CASTRO ORTIZ, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden **ESTUDIAR EL CASO**, para tomar la respectiva decisión de iniciar o no, **ACCION DE REPETICION** en el presente asunto. Por lo tanto, se ordena remitir dentro de los 5 días siguientes, la ficha correspondiente a cada miembro por intermedio de la Secretaria Técnica, para su estudio y/o análisis, a fin de decidir en sesión ordinaria número 006 de 2014.

3.8.- FUNDACION HOGARES CLARET

CUANTÍA: \$43.484.350.00

La entidad convocante, fundación Hogares Claret, centro de reeducación de adictos, suscribió con el Departamento del Huila, el convenio de cooperación No. 196 de 2011, el 29 de junio de 2011, el cual tenía como objeto, la cooperación para la prestación integral de servicios médicos, atención intrahospitalaria a veinte (20) pacientes adictos a psicofármacos pertenecientes a la población pobre y vulnerable del Departamento del Huila.

El referido convenio se empezó a Ejecutarse el veintisiete (27) de julio del año dos mil once (2011), y debido a unos otros si, que ampliaron al plazo de ejecución, este término se extendió hasta quince (15) de Mayo del año dos mil doce (2012). Posteriormente se profirió acta Liquidación y Terminación Bilateral del Convenio de Apoyo y Cooperación No. 196 del 2011, celebrado entre el Departamento del Huila - Secretaria de Salud Departamental y La Fundación Hogares Claret, Centro



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

de Reeducción a Adictos, con fecha de veintiséis (26) de Diciembre del año dos mil doce (2012).

Una vez terminado el referido convenio, la Fundación Hogares Claret, siguió con la prestación del servicio al Departamento sin ningún soporte contractual, con la promesa por parte del Departamento del Huila, que más adelante se legalizaría el convenio para proceder al pago, de los usuarios de la Secretaria de Salud Departamental, en el periodo comprendido entre el dieciséis (16) de mayo al cinco (5) de junio del año dos mil doce (2012). Dicha situación se hace evidente en cuenta de cobro y factura No. 1667, emitida por la entidad convocante el pasado seis (6) de Junio del año dos mil doce (2012), y en oficio del dieciséis (16) de mayo del año dos mil doce (2012), en donde la Secretaria de Salud Departamental, ya terminado el convenio, solicita el ingreso de tres usuarios a la Fundación Hogares Claret, expresando el Departamento que para tal fin se cuenta con recursos.

De otra parte la entidad convocante La Fundación Hogares Claret, centro de reeducación de Adictos, suscribió con el Departamento del Huila, otro convenio de cooperación radicado con el número 003 del 2012, el pasado veintinueve (29) de Marzo del año dos mil doce (2012), el cual tenía como objeto, aunar esfuerzos institucionales a efectos de brindar a 40 jóvenes en conflicto con la Ley penal, en las modalidades de internamiento preventivo y centro de atención especializado (privado de la libertad), asesoría y acompañamiento para la construcción de un proyecto de vida, en una perspectiva restablecimiento de derechos y de vinculación socio familiar, en un contexto que favorezca el desarrollo integral como ciudadanos, la sanción y resignación de sus historias de vida, la sensibilización, reflexión y reconocimiento de sus derechos y responsabilidad, la construcción de una adecuada relación consigo mismo, con los otros y con el que los rodea y la formación de competencias y habilitación para la vida a través de un programa de atención terapéutico - pedagógico.

El día dos (2) de abril del año dos mil doce (2012), se suscribió acta de inicio del convenio y posteriormente se suscribió otro si, con el fin de ampliar el término de ejecución del mismo en cuatro meses y veinticuatro días más, para un total de



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

doce meses y veinticuatro días. El convenio se liquidó el día veintinueve (29) de Abril del año dos mil trece (2013), se suscribió acta de liquidación, en donde se plasmó que la entidad convocante cumplió con el objeto del convenio y demás cláusulas.

Una vez terminado el convenio a los usuarios se les siguió atendiendo sin ningún soporte contractual el servicio, desde del 27 de Abril hasta el 12 de Junio del año 2013, en la modalidad centro de atención especializada, ya que por tratarse de medidas preventivas, consistentes en internamiento preventivo y/o sentencias debidamente ejecutoriadas, expedidas por Jueces de la Republica, el servicio no se puede interrumpir.

Además que era imposible dejar de prestar atención a los jóvenes en conflicto con la Ley Penal, la Fundación Hogares Claret, igualmente lo hizo con la promesa del Departamento que posteriormente se legalizaría el contrato o convenio. Situación que no se presentó y en una comunicación dirigida a la entidad convocante por parte de la Gobernación del Huila, la única salida posible que le dio a las obligaciones que hoy persiste, fue tratar de conciliarlas.

Así las cosas desde del 27 de Abril hasta el 12 de Junio del año 2013, la Fundación Hogares Claret, atendió con su propio peculio y por orden del Departamento y la Ley, a 27 jóvenes en conflicto con la Ley Penal, lo cual le represento a la convocada la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$37.336.350) M/CTE.

Que hay que dejar en claro y reiterar que la Fundación Hogares Claret, durante los años que ha prestado sus servicio al Departamento del Huila, cumplió bien y dirigentemente con el mismo, ya que de los informes de la interventoría de los convenios referidos en este escrito, dan cuenta de esto, es decir, efectuaba en forma diligente y responsable las obligaciones contraídas en el referido convenio.

PRETENSIONES

Como consecuencia de lo anterior el DEPARTAMENTO DEL HUILA deberá cancelar por los servicios prestados por la Fundación Hogares Claret, las siguientes sumas de dinero:

1. SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS (\$6.148.000) M/CTE. Por concepto de atención de doce (12) adultos con problemas por



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

consumo de sustancias psicoactivas, atendidos entre el periodo comprendido, del dieciséis (16) de mayo al cinco (5) de Junio del año dos mil doce (2012).

2. TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$37.336.350) M/CTE. Por concepto de atención a 27 jóvenes en conflicto con la Ley Penal, atendidos del 27 de Abril hasta el 12 de Junio del año 2012.

3. Que se ordene cancelar los intereses técnicos legales por cada una de las sumas que se concilien pagar a favor del convocante y que se declare que a la conciliación y/o sentencia se le dé cumplimiento en los términos establecidos en los artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ANALISIS y RECOMENDACIÓN DEL APODERADO DAVID HUEPE

En sesiones anteriores, conforme a actas ----- el Comité de Conciliación del Departamento, autorizó conciliar las pretensiones de la parte convocante, no obstante la Procuraduría 89 Judicial I para asuntos administrativos, advirtió inconsistencias y falta de soporte probatorio frente a las reclamaciones y por ello solicita respetuosamente al Comité de Conciliación del Departamento RECONSIDERAR lo conciliado conforme a lo siguiente:

ADULTOS CON PROBLEMAS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2012.

Encuentra la Procuraduría que pese a lo dicho por la convocante que "Todos los pacientes fueron atendidos previa remisión hecha por la misma Secretaría de Salud Departamental con el fin de asegurar la atención. Se advierte por parte del Ministerio público que pese a los requerimientos que se hizo a la parte convocante a efectos aportara los debidos soportes probatorios, estas sin embargo no fueron aportadas, es decir las remisiones hechas por pacientes por parte de la Secretaría, lo que conduce a que no está probada la prestación del servicio con



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

fundamento con la autorización que debía dar el Departamento a través de la Secretaría de Salud Departamental.

JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL PERIODO 27 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2013.

Pese al requerimiento que hace el Ministerio Público a la parte convocante, encuentra que persisten las inconsistencias, en cuanto advierte que la liquidación de la atención se presenta para 21 jóvenes durante el periodo comprendido entre el 01 al 26 de abril de 2013, y de aquí a partir del día 27 de abril ya se cobra por 28 jóvenes, sin que éste demostrado las 7 restantes personas quienes son, de donde llegaron o fueron remitidas o quienes las remitió.

Ahora al indagar con la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Departamento, conforme a oficio SGDC No. 882 del 16 de julio de 2013, le manifiesta a la Fundación Hogares Claret, que no atendió los requerimientos de manera oportuna previo a vencerse el convenio y le advierte que solo lo hizo ad portas de vencerse el mismo; por lo tanto se predica la negligencia de la convocante, toda vez por lo menos debió haber interactuado formalmente con la administración, para establecer un mecanismo que permitiera verificar que se continuaba con la prestación del servicio y con los mismos beneficiarios, con el fin de establecer realmente las personas beneficiarias, en tanto que se estima, que debido a que el Departamento, Municipio de Neiva, ICBF, están obligados a suministrar cupos para atender este tipo de población, pues nada obsta que eventualmente esas mismas personas pudieron ser atendidas con cupos sobrantes del Municipio de Neiva, o ICBF, o de otra entidad, lo que significaría que se estuviera cobrando por unos cupos y personas ya cubiertas por otras entidades.

Así mismo se concluye que debido a que en el extremo temporal en que se dice la Fundación Hogares Claret presto el aludido servicio, no había contrato vigente, entonces no era dable ejercer la supervisión del contrato de tal manera permitiera verificar realmente la población objetivo y máxime a que la convocante de manera



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

informal continuo según con una presunta prestación, sin interactuar con la administración de tal suerte se pudiera allegar acopio probatorio que permita reconocer los valores aquí reclamados, lleva entonces a que no se tenga el debido soporte documental para conciliar.

RECOMENDACIÓN

Observado las inquietudes que expone el Ministerio público, al señalar que no se demuestra la real prestación del servicio y máxime que no media autorización, no es posible acceder a las pretensiones que formula la parte convocante y por tanto conduce a que se reconsidere la autorización de conciliación obrante a acta No. ---, para en su lugar **NO CONCILIAR**, por los motivos sobrevinientes expuestos anteriormente.

DECISIÓN:

Terminada la exposición del apoderado, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila, deciden **NO CONCILIAR** el caso bajo análisis, teniendo en cuenta que sobre el caso FUNDACION HOGARES CLARET – REGIONAL HUILA se presentan documentos como el 882 del 16 de julio de 2013 expedido por la Secretaria de Gobierno, que no conocía este comité anteriormente y que solo hasta la fecha accede a esta información, respecto a la suscripción del convenio de manera tardía, por encontrarse la falta de diligencia de su directora. Además es de advertir que en razón a la loable actividad del Ministerio Publico que evidencio la ausencia de material probatorio de la solicitud y de las inconsistencias en los documentos allegados a la procuraduría por parte del convocante previa solicitud del Ministerio Público, permiten a este comité variar la decisión que respecto al mismo asunto había tomado mediante acta número 002 de 2014, por lo tanto la decisión de este comité es **NO CONCILIAR** el caso bajo análisis.

ARGUMENTOS COMITÉ:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

NO. La presente decisión se adopta bajo el concepto, según formato único de gestión de comité de conciliación – FUGCC, Concepto NO. "FALTA DE PRUEBAS ELEMENTOS DE RESPONSABILIDAD: DAÑO – HECHO ACCION U OMISION – NEXO CAUSAL

3.9.- RUBY AMEZQUITA GONZALEZ, LUIS FRANCISCO PEÑA RAMIREZ, HERMENSON DANILO, VALERY Y ROSANGY PERDOMO AMEZQUITA Y OTROS.

CUANTIA: \$ 61.000.000

HECHOS Y PRETENSIONES:

1. La señora CAROLINA PERDOMO AMEZQUITA, residente en Tesalia, Huila, asistía a control prenatal en el Hospital Santa Teresa del municipio de su domicilio; el 3 de marzo de 2013 pasado siendo las doce de la noche su salud se afectó debido a dificultades urinarias e hinchazón por las cuales acudió al citado ente asistencial, en donde se le ausculto y determinó que presentaba diagnóstico de preclampsia que por su nivel no podía tratar.
2. Los Galeanos del antedicho Hospital al nosocomio San Antonio de Padua de la Plata, Huila cuando avanzaban las tres y media de la mañana, ya que al ingreso de ella a eso de las doce de la noche, no contaban con ambulancia disponible para este fin. En este segundo centro asistencial fue recibida y examinada con miras a establecer la causa de su enfermedad y como quiera que se trataba de un pronóstico de preclampsia de inmediata atención, sus tratantes ordenaron trasladarla. EL 4 de marzo el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.
3. Así la señora CAROLINA en el Hospital San Antonio fue por espacio superior a tres horas durante las cuales tan solo la sometieron a observación, habiendo sido remitido a Neiva tan solo hasta las seis de la mañana, donde arribaron hacia el mediodía debido al bloque de las vía por parte del gremio cafetero.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

4. La señora CAROLINA desde su llegada a Neiva permaneció en cuidados intensivos y murió el 26 de mayo del mismo 2013, al presentar falla respiratoria derivada del choque séptico de origen urinario que no fue posible contener por la tardanza en trasladarla.
5. Se puede afirmar sin temor que los centros hospitalarios nombrados en la solicitud de convocatoria, es decir, las Empresas Sociales del Estado no fueron lo suficientemente cuidadosos y diligentes en ocuparse del origen del enfermedad de la víctima, pues si tenía de presente los inconvenientes del paro cafetero en el que se bloquearon las vías, debieron ocuparse más a fondo, a conciencia, de las condiciones de la usuaria y no limitarse a atenderla superficialmente y dejar que la mortal dolencia siguiera su curso letal, toda vez que diagnóstico de falla urinaria a primera face, indicaba que se trataba de una paciente en avanzado estado de gravedad a quien era menester prodigarle el tratamiento acorde con su propio cuando.
6. Su grado de responsabilidad es predicable a la fuerza pública destacada en la vía que conduce de Tesalia a Neiva (Ejército y Policía), ya que ante la gravedad de las condiciones físicas de Carolina y como quiera que los revoltosos impedía el paro de todo vehículo que inicialmente la transportaría al Hospital Universitario de Neiva, fueron impasibles y ninguna medida de choque aplicaron con miras al despeje de la carretera, algo que por autorización de la ley podía ejecutar.
7. Igualmente, resulta predicable la culpa del Ministerio de Agricultura en la ocurrencia de estos hechos y sus consecuencia, porque siendo factor desencadenante del paro cafetero estaba obligado a aplicar medidas coercitivas encaminadas a contener la conmoción del orden público.
8. A las falla de las entidades antes mencionadas, sumamos la del Municipio de Tesalia ya que como coadministrador de los bienes y servicios públicos, y a la vez responsable de velar por la salud y bienestar de los habitantes en el sentido de contar con medios de transporte para casos de calamidad emergencia como la sucedida el día 3 y 4 de marzo de 2013.

ANALISIS y RECOMENDACIÓN DE LA APODERADA LILIANA TORRES.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE SALUD dentro del ámbito de sus competencias y de conformidad a los decretos que establecen la estructura orgánica y funcional dentro del SGSSS, no es un prestador de servicios de salud, por consiguiente, al constituir una persona jurídica de derecho público diferente a la Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que prestaron servicios de salud a la señora CAROLINA PERDOMO AMEZQUITA, no es solidariamente responsable ante la presunta falla en la prestación de los servicio de salud, razón por la cual debemos ser exonerado de cualquier responsabilidad.

De otro lado, las manifestaciones del gremio cafetero las cuales afectaron todo el país, no pueden ser atribuidas al Departamento del Huila y/o a sus dirigentes, se trató de hechos ajenos a la voluntad de las autoridades departamentales.

RECOMENDACIÓN

Con fundamento en lo expuesto, recomiendo a los miembros de Comité de Conciliaciones NO presentar formula conciliatoria en el caso en comento.

DECISIÓN:

Terminada la exposición del apoderado, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila por unanimidad deciden NO CONCILIAR, teniendo en cuenta que EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE SALUD dentro del ámbito de sus competencias y de conformidad a los decretos que establecen la estructura orgánica y funcional dentro del SGSSS, no es un prestador de servicios de salud, por consiguiente, al constituir una persona jurídica de derecho público diferente a la Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que prestaron servicios de salud a la señora CAROLINA PERDOMO AMEZQUITA, no es solidariamente responsable ante la presunta falla en la prestación de los servicio de salud, razón por la cual debemos ser exonerado de cualquier responsabilidad.

ARGUMENTOS COMITÉ:



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

NO. La presente decisión se adopta bajo el concepto, según formato único de gestión de comité de conciliación – FUGCC, Concepto No 12, NO "POR INDEBIDA O FALTA LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA".

4.- RECOMENDACIONES

El presidente del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento Doctor HUMBERTO CARDOZO VARGAS, exhorta a los miembros permanentes del Comité de manera respetuosa, para que asistan a las sesiones ordinarias de manera prioritaria, toda vez que este organismo decide asuntos de altísimo impacto para los intereses del Departamento, e igualmente solicita de manera respetuosa puntualidad a las sesiones programadas.

Así mismo, exhorta a los abogados que presentan las correspondientes fichas técnicas, para que sean entregadas 4 días antes a la fecha de celebración de la sesión ordinaria debidamente programada y citada por el Secretario Técnico. Por lo tanto se le informa a cada uno de ellos, que en el punto a tratar "VARIOS", se aceptaran excepcionalmente nuevos casos, siempre y cuando se establezca en documento aparte de la ficha, por parte del apoderado las razones de fuerza mayor o caso fortuito que le impidieron entregar la ficha 4 días antes a la celebración de la sesión ordinaria. Se indica igualmente que los requisitos que debe contener cada ficha, para cada asunto a presentar al comité, se encuentra descritas en el Decreto 1940 de 2013.

Por último se ordena al Secretario Técnico que dentro de los 5 días siguientes a esta sesión, remita la ficha técnica a los miembros permanentes del comité, del asunto de acción de repetición presentado por la doctora MARTHA CASTRO, con el fin de tomar DECISION al respecto, en la sesión ordinaria número 006 que se celebrará el día 27 de marzo a las 230 pm.

TERMINACION DE LA SESION:

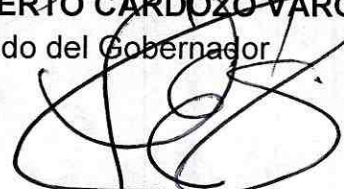


GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento del Huila

Acta de Comité Sesión Ordinaria No.005 de 2014

Agotado el orden del día se termina la sesión siendo las 6:10 p.m., y una vez leída y aprobada esta Acta por los Miembros asistentes del Comité firman en constancia de lo anterior.


HUMBERTO CARDOZO VARGAS
Delegado del Gobernador


LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR
Secretario de Hacienda


MARTHA MEDINA RIVAS
Secretaria de Educación

(AUSENTE)
HERNANDO ALVARADO SERRATO
Director Dpto. Administrativo Jurídico


CARLOS ALBERTO MARTIN S.
Secretario General


MARISOL GUTIÉRREZ TRUJILLO
Jefe de Control interno


FELIPE ANDRÉS CERQUERA RIVERA
Secretario Técnico